



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO



TESIS

**La indebida aplicación del secreto de la investigación como acción limitante
de la defensa de los imputados en crimen organizado**

Autora:

Bach. Alvarez Guerrero Mily Elvira

Asesor:

Abog. Vargas Rodríguez Cesar

Para optar el título profesional de Abogada

**Fecha de sustentación:
20 de setiembre del 2023**

Lambayeque, 2023

Tesis: “La indebida aplicación del secreto de la investigación como acción limitante de la defensa de los imputados en crimen organizado”, presentada para optar el título profesional de Abogada, por:



Bach. Alvarez Guerrero Mily Elvira
Autora

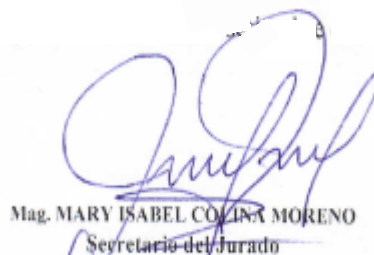


Abog. Vargas Rodríguez Cesar
Asesor

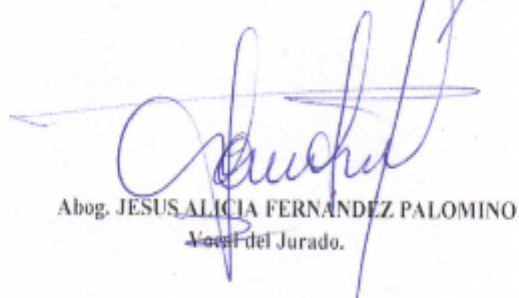
APROBADO POR:



Mag. CARLOS MANUEL MARTÍNEZ OBLITAS
Presidente del Jurado



Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO
Secretario del Jurado



Abog. JESÚS ALICIA FERNÁNDEZ PALOMINO
Vocal del Jurado.

Dedicatoria

A mi Creador quien me dio la sabiduría para poder iniciar y culminar este trabajo de investigación y pueda ser de utilidad para todos los lectores.

A mis padres por que han sido mi soporte en todo momento, por su confianza y por brindarme todos los recursos adecuados para hacer posible un objetivo más.

A mis hermanos, por su apoyo incondicional a lo largo de todo este proceso y a todas las personas que aportaron con su experiencia el desarrollo de esta investigación, así como quienes me manifestaron una palabra de aliento para hacer posible este informe de tesis.

Agradecimiento

A mi Creador, el máximo reconocimiento, por brindarme siempre la paciencia y fortaleza que me motivaron día a día y poder hoy culminar con éxito mi etapa como estudiante.

A mis padres, el pilar de mi vida, al haberme aportado con sus enseñanzas, la sabiduría para continuar desarrollándome en el trayecto de ser profesional, así como la capacidad para visibilizarme como una mujer virtuosa que tiene el denuesto de alcanzar todo lo que se proponga.

A mi madre Juanita, quien fue, es y será mi soporte, mi ejemplo de constancia, de amor y sobre todo de excelencia, orgullosa de ser tu hija.

A mis hermanos, quienes me confortan mi vida con sus muestras de amor, y por ser quienes me animan en cada esfuerzo que realizo hacia el logro de mis objetivos personales y profesionales.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA DE SUSTENTACIÓN

A C T A DE SUSTENTACIÓN PRESENCIAL N° 47-2023-UI-FDCP

Sustentación para optar el Título de ABOGADA de: **Mily Elvira Alvarez Guerrero**.

Siendo las 11:00 a.m. del día miércoles 20 de setiembre del 2023 se reunieron en la Sala de sustentaciones de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: "**LA INDEBIDA APLICACIÓN DEL SECRETO DE LA INVESTIGACIÓN COMO ACCIÓN LIMITANTE DE LA DEFENSA DE LOS IMPUTADOS EN CRIMEN ORGANIZADO**", designados por Resolución N° 72-2022-FDCP-VIRTUAL de fecha 28 de marzo del 2022, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE : Mag. **CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS**.

SECRETARIO : Mag. **MARY ISABEL COLINA MORENO**.

VOCAL : Abog. **JESUS ALICIA FERNANDEZ PALOMINO**

La tesis fue asesorada por Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ, nombrada por Resolución N°72-2022-FDCP-VIRTUAL de fecha 28 de marzo del 2022.


El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N°475-2023-FDCP-VIRTUAL de fecha 19 de setiembre del 2023.

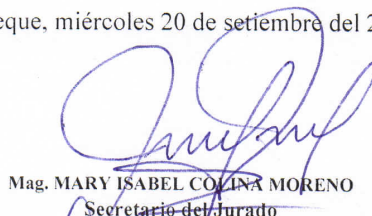
La tesis fue presentada y sustentada por la bachiller **Mily Elvira Alvarez Guerrero** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: APROBADO con la nota de 17 (DIECISIETE) en la escala vigesimal, mención de BUENO.

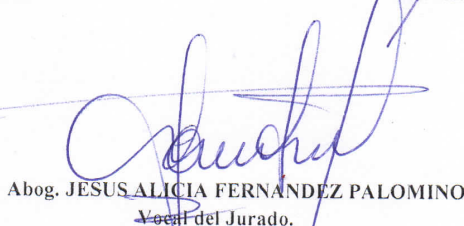
Por lo que queda APTO para obtener el Título Profesional de ABOGADA, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 11:45 a.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico tomando la juramentación respectiva y suscribiendo el Acta los miembros del jurado.

Lambayeque, miércoles 20 de setiembre del 2023


Mag. **CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS**
Presidente del Jurado


Mag. **MARY ISABEL COLINA MORENO**
Secretario del Jurado


Abog. **JESUS ALICIA FERNANDEZ PALOMINO**
Vocal del Jurado.

Certificación: El Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, certifica la veracidad del contenido del Acta de sustentación de tesis presencial N° 47-2023-UI-FDCP correspondiente a Juana Geraldine Llontop Cianza, evento que se ha realizado de manera presencial el día lunes 25 de setiembre del 2023 y aparece registrada en el archivo correspondiente.

Lambayeque, 03 de octubre del 2023

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA



Dr. Rafael Hernández Canelo
Director De La Unidad De Investigación

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ, Docente/ Asesor de tesis/ Revisor del trabajo de investigación de la bachiller en DERECHO Mily Elvira Alvarez Guerrero, Titulada LA INDEBIDA APLICACIÓN DEL SECRETO DE LA INVESTIGACIÓN COMO ACCIÓN LIMITANTE DE LA DEFENSA DE LOS IMPUTADOS EN CRIMEN ORGANIZADO, luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 14% verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 17 de agosto del 2023



Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
D.N.I.16465401
ASESOR



Bach. Mily Elvira Alvarez Guerrero

DNI: 71464516

Autor

La indebida aplicación del secreto de la investigación como acción limitante de la defensa de los imputados en crimen organizado

INFORME DE ORIGINALIDAD

14%	15%	2%	1%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	7%
2	repositorio.upsb.edu.pe Fuente de Internet	1%
3	repositorio.unprg.edu.pe:8080 Fuente de Internet	1%
4	repositorio.unprg.edu.pe Fuente de Internet	1%
5	www.repositorio.upp.edu.pe Fuente de Internet	1%
6	repositorio.ucsg.edu.ec Fuente de Internet	<1%
7	docs.google.com Fuente de Internet	<1%
8	repositorio.upagu.edu.pe Fuente de Internet	<1%


Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
D.N.I.16465401
ASESOR



Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Milly Elvira Alvarez Guerrero
Título del ejercicio: REVISIÓN DE TESIS
Título de la entrega: La indebida aplicación del secreto de la investigación como ...
Nombre del archivo: TESIS_ALVAREZ_GUERRERO_MILY.docx
Tamaño del archivo: 182.24K
Total páginas: 101
Total de palabras: 18,190
Total de caracteres: 96,481
Fecha de entrega: 22-jul.-2023 09:19p. m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega... 2135165048

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

TESIS

"La indebida aplicación del secreto de la investigación como acción
limitante de la defensa de los imputados en crimen organizado"

Autora:

Bach. Alvarez Guerrero Milly Elvira

Para optar el título profesional de Abogado

Asesor:

Abog. Vargas Rodríguez Cesar

Lambayeque, 2023

Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
D.N.I.16465401
ASESOR

Índice general

Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Índice general	v
Índice de tablas.....	ix
Índice de ilustraciones	x
Resumen	xi
Abstract	xii
Introducción	13
Capítulo I.....	18
Los aspectos de la metodología.....	18
1.1. El planteamiento del problema.....	18
1.2. La formulación del problema	19
1.3. La justificación de la investigación	19
1.4. La importancia de la investigación.....	20
1.5. Los objetivos de la investigación	20
1.5.1. El objetivo general.....	20
1.5.2. Los objetivos específicos.....	20
1.6. La hipótesis de la investigación.....	21
1.7. Las variables de la investigación.....	21
1.7.1. Sobre la variable independiente.....	21

1.7.2. Sobre la variable dependiente	21
1.8. Los métodos aplicados en la investigación	21
1.8.1. El método de observación de la realidad	22
1.8.2. El método de interpretación exegetica.....	22
1.8.3. El método de interpretación sistemática	22
Capítulo II	24
La teoría del secreto de la investigación aplicada en el proceso penal	24
2.1. Los trabajos previos de la investigación	24
2.2. El secreto de la investigación en el proceso penal	26
Capítulo III	28
El derecho a la defensa de los imputados en los casos de crimen organizado	28
3.1. El derecho a la defensa	28
3.2. La persecución penal del crimen organizado	29
Capítulo IV	33
El análisis de los resultados.....	33
4.1. Unidad de análisis	33
4.2. Resultado del análisis de las disposiciones fiscales en el distrito Fiscal de Lambayeque	34
Capítulo V	39
La contrastación de la hipótesis	39
5.1. La discusión de los resultados	39

5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Investigar las bases teóricas que sustentan el secreto de la investigación aplicada en el proceso penal”	39
5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Estudiar doctrinariamente el derecho a la defensa de los imputados para verificar su efecto en los casos de crimen organizado”	49
5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar la realidad jurisdiccional en el Distrito Judicial de Lambayeque respecto a la aplicación del secreto de la investigación en los casos de crimen organizado para verificar la eficacia de la defensa de los imputados”	57
5.1.4. Discusión sobre el objetivo: “Proponer la instauración de parámetros normativos adecuados a fin de garantizar la debida aplicación del secreto de la investigación y garantizar la defensa de los imputados”	61
5.2. La validación de las variables	65
5.2.1. Validación de la variable independiente: La indebida aplicación del secreto de la investigación	65
5.2.2. Validación de la variable dependiente: El derecho a la defensa de los imputados por crimen organizado	70
5.3. La contrastación de la hipótesis	74
Conclusiones	76
Recomendaciones.....	79
Bibliografía.....	80
Anexos.....	84

1. Formulario de encuesta para ser aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo	84
2. Resultados de la aplicación de la encuesta para la opinión de expertos	86

Índice de tablas

Tabla 1: “Tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 1”	86
Tabla 2: “Tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 2”	89
Tabla 3: “Tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 3”	92
Tabla 4: “Tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 4”	94
Tabla 5: “Tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 5”	96
Tabla 6: “Tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 6”	98

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 1”	87
Ilustración 2: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 2”	90
Ilustración 3: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 3”	93
Ilustración 4: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 4”	95
Ilustración 5: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 5”	97
Ilustración 6: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 6”	99

Resumen

El planteamiento de esta investigación se basa en la indebida aplicación del secreto de la investigación como acción limitante de la defensa de los imputados en crimen organizado, título que adopta en razón de lo observado por la investigadora durante el desarrollo de sus labores jurisdiccionales, invitando con ello al cuestionamiento específico sobre el plazo establecido para este tipo de condición de reserva, ello se aprecia como una acción que vulnera la defensa en su ejercicio, dado el efecto limitante sobre la información que se presume debe ser usada para la estrategia de la defensa técnica.

Para tal fin se aplicaron los métodos de investigación relacionados con la observación de la realidad que permitió reconocer el problema en los documentos tanto de teoría así como en las disposiciones fiscales en las que se requiere la aplicación del secreto de la investigación por plazos que superan en exceso lo que la norma plantea como límite; así también se aplicaron los métodos de la interpretación de las normas jurídicas tanto el exegético así como el sistemático para revisar la regla jurídica que plantea la aplicación del secreto de la investigación así como la opción de la reserva.

La determinación final de esta tesis se orienta a reconocer en la realidad un problema de exceso en la aplicación del plazo sobre el secreto de la investigación, demostrándose además que existe un carácter de vulneración del derecho a la defensa de los imputados que participan en investigaciones por presuntas organizaciones criminales, debido a la limitación en plazo excesivo de la información requerida para la estrategia de su defensa. En base a ello se plantea finalmente el control normativo, aplicando un límite de plazo de 30 días para este tipo de investigaciones complejas, sugiriéndose además la opción de aplicar la reserva que cumple condiciones puntuales sobre el desarrollo adecuado de la investigación.

Palabras clave: Secreto de la investigación, derecho de defensa, crimen organizado

Abstract

The approach of this investigation is based on the improper application of the secrecy of the investigation as a limiting action for the defense of the defendants in organized crime, a title that it adopts due to what was observed by the investigator during the development of her jurisdictional work, thus inviting specific questioning about the term established for this type of confidentiality condition, this is seen as an action that violates the defense in its exercise, given the limiting effect on the information that is presumed to be used for the technical defense strategy.

For this purpose, the research methods related to the observation of reality were applied, which allowed the problem to be recognized in both theoretical documents and in fiscal provisions in which the application of the secrecy of the investigation is required for periods that exceed in excess what the norm establishes as a limit; In this way, the methods of interpreting legal norms, both exegetical and systematic, were also applied to review the legal rule that raises the application of the secrecy of the investigation as well as the option of reservation.

The final determination of this thesis is aimed at recognizing in reality a problem of excess in the application of the term on the secrecy of the investigation, also demonstrating that there is a nature of violation of the right to defense of the accused who participate in investigations by alleged criminal organizations, due to the limitation in excessive time of the information required for the defense strategy. Based on this, regulatory control is finally proposed, applying a 30-day term limit for this type of complex investigation, also suggesting the option of applying the reserve that meets specific conditions on the proper development of the investigation.

Keywords: Secret of the investigation, right of defense, organized crime

Introducción

Esta tesis que lleva por título: “La indebida aplicación del secreto de la investigación como acción limitante de la defensa de los imputados en crimen organizado”, tiene su origen en la verificación del problema en la realidad jurisdiccional, lo cual se aprecia como un límite innecesario que se encuentra afectando el derecho a la defensa de los imputados por este tipo de crímenes complejos.

Según lo que ordena la metodología diseñada en el proyecto de la investigación, se plantea la revisión de la realidad jurisdiccional en función a los requerimientos que específicamente sugieren la aplicación del secreto de la investigación bajo un plazo que supera el límite establecido en el ordenamiento jurídico. Se percibe como problema en tanto que el supuesto control de legalidad y acusación que opera en el nivel del proceso, no suerte los efectos adecuados, toda vez que se desarrollan las investigaciones bajo tal condición durante el plazo establecido y que en ocasiones por la justificación de garantizar los procedimientos de investigación, termina ampliándose dicho periodo.

Lo señalado se consolida como un problema que ataca directamente la estabilidad que supone el control garantista de los derechos en el desarrollo del proceso penal, esto en tanto que se altera la garantía de la defensa tanto formal como material en los casos complejos como el observado sobre crimen organizado. Esta problemática tiene la misma característica que se ha evidenciado en investigaciones

anteriores sobre el control de plazo respecto a la aplicación de la prisión preventiva, que además de la ausencia de justificación supera las posibilidades de la defensa como derecho; siendo que, para el caso del secreto de la investigación, el hecho de ser aplicado resulta alterando de manera más excesiva el derecho a la defensa.

Esta limitación del derecho a la defensa se percibe en tanto que la ausencia de acceso a la información relevante sobre el caso materia de imputación no permite a los imputados tener la data suficiente que permita a los letrados que se ocupan de su defensa, crear adecuadamente una secuencia estratégica que le permita la característica de igualdad entre las partes del proceso y lograr una idónea defensa técnica, que de por sí ya se encuentra alterada con el plazo excesivo.

Los aspectos señalados, han permitido aplicar los métodos antes explicados bajo el lineamiento de control del análisis del problema en función a una formulación que cuestiona la realidad y se diseña bajo la siguiente fórmula: ¿Qué efecto produce la indebida aplicación del secreto de la investigación sobre la garantía del derecho a la defensa de los imputados por crimen organizado?

Como es posible apreciar, se trata de un cuestionamiento que obedece a la observación de la realidad y que como tal para el inicio de la investigación se ha diseñado una posible respuesta en base a los conocimientos primigenios al desarrollo del estudio, lo cual se planteó de la siguiente manera: Si, la indebida aplicación de reserva de la investigación produce alteración del sentido garantista

del proceso penal; entonces, se estará afectando el derecho a la defensa de los imputados por crimen organizado.

Los fines de la investigación sin duda alguna se plantearon en base a los conceptos que representan las variables de estudio y se encuentra integradas tanto en el título, la formulación y la hipótesis de esta investigación, las cuales también participan de manera activa en la construcción de los objetivos, así el general indica como meta: Determinar el efecto que produce la indebida aplicación del secreto de la investigación sobre la garantía del derecho a la defensa de los imputados por crimen organizado.

Además de ello se plantearon metas específicas destinadas al desarrollo teórico y de evaluación de la realidad que se constituye a través de los objetivos específicos: Investigar las bases teóricas que sustentan el secreto de la investigación aplicada en el proceso penal; Estudiar doctrinariamente el derecho a la defensa de los imputados para verificar su efecto en los casos de crimen organizado; Analizar la realidad jurisdiccional en el Distrito Judicial de Lambayeque respecto a la aplicación del secreto de la investigación en los casos de crimen organizado para verificar la eficacia de la defensa de los imputados.

Es en base a estos lineamientos se han desarrollado los contenidos de la investigación, siendo que en primer lugar se describieron los aspectos básicos de la metodología a través del desarrollo del Capítulo Primero, el cual diseña la ruta

mediante el planteamiento de la investigación, la justificación, importancia, metas a desarrollar y los métodos aplicados para el análisis de la realidad.

También en base a ello se ha plasmado en el Capítulo segundo que se ocupa del desarrollo teórico sobre el secreto de la investigación, tomando como punto de partida los trabajos previos que mostraron el nivel académico alcanzado previamente sobre el desarrollo de este tema; para que a continuación se incorporen los parámetros teóricos sobre el secreto de la investigación como figura jurídica aplicada en la investigación penal, lo cual ha servido de base para establecer el sentido de control que ofrece y los límites que deberían adoptarse normativamente.

En cuanto al desarrollo del Capítulo tercero se ha considerado el aspecto teórico sobre la garantía de la defensa como derecho en el desarrollo de la investigación penal, prestando especial atención de su ejercicio en los casos de crimen organizado, para lo cual se consideraron los aspectos doctrinarios sobre la defensa como garantía constitucional y lo relacionado con la persecución penal respecto al crimen organizado, esto último con la finalidad de tener en cuenta los límites que se establecer para la acción punitiva del Estado en esta lucha, lo cual se enfocó en función al carácter garantista del proceso penal.

Así con estas bases teóricas y los resultados obtenidos en el Capítulo Cuarto se pudo desarrollar el contenido crítico que se consolida mediante la discusión y validación de las variables para alcanzar la contrastación de la hipótesis en el Quinto Capítulo; fundamentos que han servido para desarrollar las conclusiones vinculadas

con cada uno de los objetivos específicos y las recomendaciones de esta investigación.

La Autora.

Capítulo I

Los aspectos de la metodología

1.1. El planteamiento del problema

Tal cual se puede apreciar en el desarrollo de las acciones que corresponden al Ministerio Público al inicio de las investigaciones que conlleven a un proceso de crimen organizado, existe un problema relacionado con la concepción del secreto de la investigación que se encuentra contemplado en el artículo 324 del Código Procesal Penal. Esta circunstancia se debe a que en sede fiscal se decreta dicha condición por un plazo que se considera excesivo y además ausente de especificación respecto a que tipo de actuaciones se ha de contemplar dicha limitación para las propias partes de la investigación; todo ello se concibe como vulneración al derecho a la defensa, desde la perspectiva de los principios garantistas del proceso.

Es precisamente por tal razón que se proyecta esta investigación con el fin de verificar primero la existencia de este problema en la realidad para lo cual se habrán de revisar las disposiciones fiscales donde se decreta la condición de secreto de la investigación para contrastar dicho resultado con las bases teórico doctrinarias que detallan la forma en que habrá de comprenderse tal condición del proceso y los límites que deben contemplarse a fin de evitar la vulneración del derecho de defensa del imputado. Resultado que permitirá a esta investigación académica proponer la instauración de parámetros jurídicos más exactos para que se garantice la correcta

aplicación de esta limitación y por ende los derechos que le corresponden a las partes procesales.

1.2. La formulación del problema

¿Qué efecto produce la indebida aplicación del secreto de la investigación sobre la garantía del derecho a la defensa de los imputados por crimen organizado?

1.3. La justificación de la investigación

Se encuentra como primera justificación de esta investigación a la de corte social, toda vez que el control de los principios que se aplican en el proceso penal a cargo del derecho como ciencia, implican una afectación de la seguridad de justicia a la que se tiene derecho como parte de la sociedad y como consecuencia de ello el mantenimiento del equilibrio social basado en un sistema de justicia adecuado que este dotado de predictibilidad y funciones que permitan conservar toda aquella característica social de comunidad equilibrada.

De otro lado se puede reconocer una justificación de tipo jurídica, dado que la condición de control que ejercen los principios garantistas sobre el desarrollo del proceso penal, debe tener la mayor atención de parte no sólo de las políticas públicas que se ocupan de organizar la persecución del crimen organizado, sino también de quienes crean y aplican el derecho, tal es así que se precisa verificar la manera en que se utiliza el secreto de la investigación para restringir derechos y sobre todo si tal acción constituye vulneración del derecho a la defensa del imputado.

1.4. La importancia de la investigación

Es importante el desarrollo de esta investigación en virtud de que los alcances de la sugerencia han de tener un efecto sobre la consolidación de un derecho penal que oriente un proceso de investigación adecuado sobre todo en los casos de crimen organizado a fin de evitar la vulneración del derecho a la defensa y concretar con ello un proceso penal dotado de todas las garantías que implica su esquema, con todo ello se beneficia la sociedad en su totalidad.

Luego se puede ubicar también un beneficiario directo para lo que corresponde el control adecuado del principio del secreto de la investigación y su aplicación en el proceso penal, que resulta ser el propio imputado.

1.5. Los objetivos de la investigación

1.5.1. El objetivo general

- Determinar el efecto que produce la indebida aplicación del secreto de la investigación sobre la garantía del derecho a la defensa de los imputados por crimen organizado.

1.5.2. Los objetivos específicos

- Investigar las bases teóricas que sustentan el secreto de la investigación aplicada en el proceso penal.
- Estudiar doctrinariamente el derecho a la defensa de los imputados para verificar su efecto en los casos de crimen organizado

- Analizar la realidad jurisdiccional en el Distrito Judicial de Lambayeque respecto a la aplicación del secreto de la investigación en los casos de crimen organizado para verificar la eficacia de la defensa de los imputados.

- Proponer la instauración de parámetros normativos adecuados a fin de garantizar la debida aplicación del secreto de la investigación y garantizar la defensa de los imputados.

1.6. La hipótesis de la investigación

Si, la indebida aplicación de reserva de la investigación produce alteración del sentido garantista del proceso penal; entonces, se estará afectando el derecho a la defensa de los imputados por crimen organizado.

1.7. Las variables de la investigación

1.7.1. Sobre la variable independiente

La indebida aplicación del secreto de la investigación.

1.7.2. Sobre la variable dependiente

El derecho a la defensa de los imputados por crimen organizado.

1.8. Los métodos aplicados en la investigación

Para alcanzar la finalidad académica de esta investigación se han escogido ciertos métodos involucrados con el carácter jurídico de la evaluación de la realidad, así se tiene a los métodos siguientes.

1.8.1. El método de observación de la realidad

Este método ha permitido observar tanto el aspecto teórico mediante los documentos académicos que se utilizaron como fuentes de información viabilizados mediante la técnica del fichaje bibliográfico; además de la observación jurisdiccional que se aplicó para observar el criterio adoptado en las disposiciones que sugieren el secreto de la investigación como característica del proceso aplicado en un plazo excesivo, para lo cual se ha utilizado la guía de observación jurisdiccional.

1.8.2. El método de interpretación exegetica

Este método se orienta a la revisión de las reglas en función a su contenido gramatical, lo que se conoce también como la interpretación literal con el fin de reconocer el sentido de la misma o la intención del legislador para controlar el desarrollo de la investigación penal, como es el caso de esta tesis respecto al contenido del artículo 324 del ordenamiento penal adjetivo, para lo cual se ha utilizado la guía de interpretación.

1.8.3. El método de interpretación sistemática

Partiendo de la información ante señalada, se ha planteado un nivel de interpretación normativa en razón del vínculo que se establece entre las normas jurídicas como parte integrante de un solo sistema, así se entiende que la revisión del parámetro establecido en el artículo 324, debe tener vinculación directa con la normativa constitucional que se plantea como la base del ordenamiento; es así que los resultados de esta evaluación permitieron reconocer la existencia de una alteración respecto al derecho a la defensa que constitucionalmente se garantiza, lo

que afianza el planteamiento de un límite excesivo en función al plazo que jurisdiccionalmente se postula y acepta respecto al secreto de la investigación en los casos de crimen organizado.

Capítulo II

La teoría del secreto de la investigación aplicada en el proceso penal

2.1. Los trabajos previos de la investigación

Ha de tenerse en cuenta como principal antecedente la investigación desarrollada por Ricardo Adolfo Perez Capcha (2021), bajo el título “Alcance del secreto de las diligencias preliminares en la investigación contra el crimen organizado y su relación con el derecho de defensa del imputado”, presentada a la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión para obtener el grado de Maestro en Derecho; de la cual se ha extraído lo siguiente:

“El secreto de las diligencias preliminares por tiempo prudencial, no permite conocer al imputado y defensa legal técnica los actuados del Ministerio Público y la Policía, lo que afecta al contradictorio e igualdad de armas, finalidad principal de la reforma procesal penal”. (Pérez Capcha, 2021, pág. 84)

Se tiene también la tesis de Diaz Gonzales Patty Vanessa (2020) quien bajo el título “Criterios para la incorporación de prueba nueva en etapa de juicio oral ante la vulneración del derecho a la defensa técnica eficaz del imputado, a partir de los procesos conocidos en los juzgados penales de Lambayeque”, desarrolla la investigación conducente obtener al grado de Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, de donde se extrae lo siguiente:

“Se han analizado las actas de juicio oral emitidas en los Juzgados Penales de Lambayeque resoluciones y sentencias de vista expedidas por las Salas Penales de Apelaciones del referido distrito judicial y de este modo, como aporte de la presente investigación, se ha propuesto, una modificación legislativa de lege ferenda de la normativa relativa a la admisión de prueba nueva a efectos que se regule una causal basada en la defensa técnica ineficaz del imputado”. (Díaz Gonzales, 2020, pág. 96)

De otro lado se tiene la investigación desarrollada por Ronal Vilfredo Pinto Arce (2015) bajo el título de “Vulneración del derecho de defensa del imputado y del principio contradictorio en el Código Procesal Penal en el sistema acusatorio, garantista y adversarial”, presentada a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo para optar el grado de Maestro en Derecho, de la cual se ha extraído la siguiente conclusión:

“La audiencia de apelación prescrita por el artículo 420.5 NCPP se desarrolla trasgrediendo principios y garantías procesales que se encuentran inmersas en el impulso de un Procesal Penal Contradictorio, Adversarial y Garantista, más aún vulnera principios elementales como la imparcialidad, contradicción, etc; lo cual evidencia que las prácticas inquisitoriales, no han sido abandonadas completamente”. (Pinto Arce, 2015, pág. 155)

En virtud a lo señalado respecto a la defensa del imputado es importante considerar la investigación desarrollada por Viviana Katherine Martín Cuadros

(2018) bajo el título “Nulidad de los procesos judiciales por deficiente defensa técnica jurídica. Análisis del caso: proceso penal de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 906 de 2004”, presentada a la Universidad Católica de Colombia para obtener el título de Abogada; trabajo del cual se extrae la siguiente conclusión:

“Por lo tanto la defensa técnica deficiente genera nulidad del proceso penal teniendo en cuenta que configura una violación al derecho constitucional y convencional al derecho a la defensa. Así lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia quien ha hecho énfasis en la importancia de que la defensa sea idónea y despliegue sus argumentos de defensa oportunamente, soportado en la legislación existente.

Por lo tanto, cuando el abogado desconoce sus obligaciones y es deficiente en su actuar, debido a que se hace evidente el desconocimiento absoluto del proceso penal y las normas relativas al mismo, por lo tanto, sus actuaciones son torpes, desacertadas y equivocadas, lo que genera una evidente desigualdad respecto de las partes del proceso penal (Prieto, 2003)”. (pág. 18)

2.2. El secreto de la investigación en el proceso penal

En lo que corresponde a la definición del secreto en la investigación penal se ha de recurrir a la doctrina en la cual se ha ubicado al Dr. Angulo (2006), que desarrolla un trabajo sobre “La investigación y el Delito en el Nuevo Código Procesal Penal”, en torno a la medida que dispone el secreto de la investigación refiere que: “(...) Se advierte que tal decisión debe tener como motivo objetivo que

el conocimiento de ello pueda poner en peligro el éxito de la investigación.” (Angulo Arana, 2006, pág. 120)

Tal como se puede apreciar, el secreto de la investigación se constituye como una medida que se adopta durante el desarrollo de la investigación con el fin de brindar seguridad a la ejecución de los actos procesales que implican averiguar el nivel de responsabilidad de los implicados en la acción delictiva, lo cual tiene una relación directa con lo que se conoce como la reserva de la investigación.

Esta otra percepción de la seguridad de la información que se incorpora o maneja en el proceso de investigación se ha contemplado señalando que: “La reserva de la investigación se tiene entendida como una limitación que impide que cualquier persona extraña al proceso pueda tomar conocimiento de él mientras se desarrolla la investigación”. (Rodríguez, 2017)

La distinción necesaria que debe tenerse en cuenta para no generar la confusión teórica y en su aplicación durante el proceso, será una de las principales tareas en la ejecución de la presente investigación, es importante pues, conocer los alcances, el ámbito de protección que sin duda alguna incorpora también límites al ejercicio de la función jurisdiccional a fin de resguardar el sentido garantista del proceso de investigación penal.

Capítulo III

El derecho a la defensa de los imputados en los casos de crimen organizado

3.1. El derecho a la defensa

Como parte principal del planteamiento se tiene a la defensa del imputado que debe ser considerada en todo momento durante el proceso debido a las condiciones de garantía que caracterizan a las fase en las cuales se divide; así se debe señalar que este concepto es asumido como ciertas circunstancias que se desarrollan con como condición “(...) jurídica y material de ejercer la defensa de los derechos e intereses de la persona en juicio y ante las autoridades, de manera que se asegure la realización efectiva de los principios de igualdad de las partes y de contradicción”. (Cruz Barney, 2015, pág. 3)

Así las condiciones del proceso, es relevante la participación de la defensa del imputado como una trascendental característica, lo cual tiene una estrecha relación con quien en el desarrollo del proceso asume labores destinadas al aseguramiento de tal derecho como es el caso de los letrados, puesto que “No hay proceso penal sin dos partes: acusación y defensa, y esta solamente se puede formar si el procesado cuenta con abogado defensor, es decir, con defensa técnica”. (Nakasaki Servigón, 2006, pág. 19)

Desde luego esta labor de los letrados incorpora no solo condiciones de ética y moralidad, sino de capacidad para poder asumir la defensa del imputado, bajo este presupuesto se entiende que las condiciones que impulsan este ejercicio deben tener

un apoyo en la estructura procesal, puesto que la ausencia de dicho cuidado alcanza para el razonamiento de nulidades puesto que al existir “nulificación de la gestión inapta de sus defensores, lo que obligaría a un cierto control de calidad de los tribunales, respecto a la gestión de los mismos”. (Sagüez, 1999, pág. 224)

3.2. La persecución penal del crimen organizado

El desarrollo de la actividad delincuencial en la actualidad alcanza índices que afectan la realidad social de modo tal que propicia un efecto negativo sobre la organización y el control que se supone debe ejercer el Estado, lo cual debe tenerse en cuenta como un aspecto de necesidad social que debe resolverse. Para tales efectos se cuenta con la participación del derecho como ciencia para aplicar las reglas existentes o evaluar la posibilidad de crear otras nuevas enfocadas en la perspectiva situacional que impulsa el surgimiento del crimen organizado.

Tan es así que estos efectos sociales inspiran la creación del derecho basado en que “La realidad delictual que oprime a los Estados constitucionalizados también extiende sus efectos de desestabilización y victimización a la comunidad, por eso, en razón a los relacionamientos convencionales y con ello desde los dispositivos normativos de vinculación internacional, cada parte (Estado), desde la definición de política criminal, debe diseñar estrategias e implementar acciones drásticas que permitan devolver la armonía con la mayor celeridad y justicia posibles, sobre todo para restablecer los derechos conculcados a las víctimas”. (Toro Garzon & Bustamante Rúa, 2019)

El constructo de tales estrategias de control deben desarrollarse bajo parámetros adecuados que permitan una consecuencia de investigación propicia que conlleve a la desarticulación de las organizaciones criminales lo cual debe estar acompañado de otros medios que se encuentren plasmados en el criterio de quienes deben decidir sobre el nivel de responsabilidad penal.

Así se tiene que “La información puede ser utilizada en diferentes formas, lo fundamental es que la misma nos lleve a sugerir nuevos pasos tácticos. Debe ser tomada en consideración especial toda aquella evidencia que puede ser presentada ante los tribunales. Toda esta actividad de recolección de información tiene que ser realizada cumpliendo escrupulosamente los trámites legales, ya que la misma será analizada cuidadosamente por las instituciones judiciales y la opinión pública. Debe recordarse que la búsqueda de información sobre personas, que tenga que ver con sus hábitos de vida y creencias siempre estará relacionada con preceptos constitucionales”. (De La Cruz Ochoa, 2007, pág. 118)

Es importante que este tipo de construcciones estratégicas se encuentren ligadas no solo con la realidad nacional que se experimenta, sino que también adquieran el sentido de control que se asume a nivel internacional, dado que la situación globalizada del mundo se torna cada vez más intensa en el sentido de una formulación de nuevas formas de delinquir en busca de dinero fácil mediante el perjuicio de otros bienes jurídicos ajenos y de la estructura social que proyecta una situación de caos.

Es convergencia de situaciones se dibuja en función a la perspectiva que se tiene sobre este tipo de grupos para delinquir, así pues “La criminalidad organizada se ha convertido en los últimos años en una peligrosa forma de delinquir que adquiere dimensiones trasnacionales. Como se ha podido analizar, las organizaciones criminales han ido trasformando su estructura, han ampliado las actividades delictivas, sus integrantes se han profesionalizado y lo más peligroso para los Estados, han adquirido cotas de poder en las instituciones estatales corrompiéndolas y utilizándolas para la consecución de sus fines- dotar de apariencia legal los beneficios obtenidos con sus actividades delictivas y adquirir zonas de **poder** para llevar a cabo sus acciones”. (Espinoza de los Monteros, 2017, pág. 25)

Toda acción que se desarrolle con el fin de alcanzar una adecuada persecución del delito en la modalidad de crimen organizado, resulta de vital importancia en tanto que las condiciones que adoptan las acciones antijurídicas en la realidad son cada vez más crecientes, por lo mismo que la operación que se destina para la desarticulación de este tipo de organizaciones, debe incorporar además de la acción controladora del Estado, la aplicación de criterios idóneos por parte de los magistrados así como de todo el aparato de justicia lo cual implica a los operadores de justicia.

Esto se aprecia en razón de que “La actuación de los operadores de justicia resulta de vital importancia para el éxito de la lucha contra la criminalidad. También son de gran ayuda la preparación e instrumentalización de estos

órganos, así como su permanente coordinación para conseguir el éxito deseado”.

(Vásquez Arana, 2020, pág. 162)

Capítulo IV

El análisis de los resultados

4.1. Unidad de análisis

De acuerdo con el planteamiento del problema de esta investigación se ha considerado la unidad de análisis que permita reconocer la existencia del problema en el ámbito jurisdiccional, sobre lo que de manera puntual se hace el reconocimiento es en el tema de la aplicación de la condición restrictiva de la información que vincula a las partes del proceso de investigación penal. Esta condición se aprecia como una limitante a los derechos de las partes intervinientes, con especial atención a los que le son conferidos al imputado por su condición especial de posible restricción de sus derechos ante la eventual demostración de responsabilidad penal.

Tal cual lo señalado, esta unidad de análisis se puede apreciar en el contenido de la población, así como la muestra que se determinó para esta tesis, siendo en el caso de la población a los procesos sobre crimen organizado que son atendidos en las Fiscalías penales especializadas en este tema de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Fiscal de Lambayeque; para el caso de la muestra se ha tenido en cuenta a 10 disposiciones fiscales sobre crimen organizado de los cuales se tomarán los criterios correspondientes en la que se aprecie la vulneración del derecho a la defensa en función a la invocación del principio de secreto de la investigación.

4.2. Resultado del análisis de las disposiciones fiscales en el distrito Fiscal de Lambayeque

Para el correcto análisis del material jurisdiccional que se ha podido recoger como parte de la aplicación de la muestra, ha de tenerse en cuenta el objeto de investigación: “Determinar el efecto que produce la indebida aplicación del secreto de la investigación sobre la garantía del derecho a la defensa de los imputados por crimen organizado”, por lo mismo que en las disposiciones fiscales se observará el sentido que adopta el criterio del magistrado para aplicar esta figura jurídica, tal resultado permitirá observar si resulta adecuado el límite al acceso de información.

Carpeta Fiscal	Materia	Criterio y plazo
C.F. N° 75-2019	Crimen organizado: Usurpación agravada	Basado en la presunta existencia de organización criminal y en aplicación de las máximas de la experiencia del magistrado sobre el riesgo que representa para la vida y la integridad física de las víctimas, se limita la información de la

		investigación para evitar la afectación de las acciones de investigación. Plazo de 7 meses y veintinueve días para lo cual se registra a las partes como personas no identificadas
C.F. N° 22-2020	Crimen organizado- delitos contra la paz pública	Basado en la presunción de organización criminal existente por lo que se establece un plazo de investigación por el periodo de 7 meses con veintinueve días, bajo el decreto de secreta, para lo cual se ha de registrar en el sistema de la fiscalía, los datos de las partes bajo la nominación de desconocidas.
C. F. N° 18-2020	Crimen organizado	Declara el inicio de la investigación preliminar

		como una de crimen organizado por el plazo de ocho meses, decretando además el secreto de la misma por el periodo de 7 meses con veintinueve días, debiendo registrarse a las partes procesales como no identificadas.
C.F. N° 13-2020	Crimen organizado	Se apertura la investigación por crimen organizado en un periodo de ocho meses, por delito contra la tranquilidad pública en modalidad de organización criminal agravando al Estado. Se decreta el secreto de la investigación preliminar por el plazo de 7 meses con veintinueve días, registrando a las partes como no identificadas.

OBSERVACIÓN:

De acuerdo a la observación que se desarrolla en función al criterio jurisdiccional, debe señalarse que es posible un origen problemático en función a la estructura normativa que diseña el ordenamiento procesal penal para describir la reserva y el secreto de la investigación, esto en tanto que se trata de una descripción que comparte un mismo artículo que es el 324 de dicho cuerpo normativo. Esta observación, tiene un efecto sobre la conjetura que se aprecia en el desarrollo de los procesos de investigación respecto a las organizaciones criminales, lo que según la revisión arriba generada muestra un exceso respecto al plazo.

Cabe indicar que según lo estudiado, el concepto de la reserva se contiene en función a la data que puede ser accedida únicamente por las partes que intervienen en el proceso de manera directa; esto sin duda obedece a condiciones peculiares referidas al tratamiento de datos relacionados con la identidad y otras condiciones que podrían alterar el sentido o progreso del proceso penal. La consolidación de los parámetros que impulsan a toda investigación penal se han de percibir en función a la finalidad del mismo, que es alcanzar el conocimiento de la verdad en mérito a la prueba.

Para tales fines, la circunstancia de reserva puede ser útil para evitar la contaminación de datos en función a participación tanto de medios de comunicación social, así como de terceros interesados por circunstancias ajenas a la naturaleza del delito que se discute en el proceso. Esta protección se verifica como válida, en tanto

que las circunstancias de adopción de garantías son cubiertas por el mismo proceso en razón de los derechos de las partes principalmente del imputado.

Otro aspecto que se verifica como elemento crítico es el plazo excesivo que se plantea para el secreto de la investigación, que alcanza casi el mismo nivel del periodo de investigación, diferenciándose por un mes de distancia, lo cual se aprecia como una circunstancia inadecuada para asegurar el normal desarrollo de las garantías procesales que deben caracterizar a la investigación.

Capítulo V

La contrastación de la hipótesis

5.1. La discusión de los resultados

5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Investigar las bases teóricas que sustentan el secreto de la investigación aplicada en el proceso penal”

Discusión de los trabajos previos

Pérez (2021)

¿cuál es el efecto que produce el secreto en las diligencias preliminares?

Disponer el secreto de la investigación más allá de tener una motivación con argumentos sólidos, se realiza para una obtención de información o medios de prueba que evidencien la comisión de un hecho delictivo.

Si bien es cierto que, en el artículo 324°.2 del Código Procesal Penal, establece que dicho acto procesal tiene un plazo de 20 días, cuando su conocimiento de dicha documentación dificultase el éxito de la investigación.

Lo que se quiere dar a conocer es la indebida aplicación del secreto de la investigación, siendo que esta se dispone cuando el investigado tiene conocimiento de que está siendo investigado por la Fiscalía Especializada en la Criminalidad Organizada FECCOR-Chiclayo.

Claramente existe cierta contradicción entre el Artículo 68°.3 y el artículo 324°.2 del Código Procesal Penal, ya que no se ha establecido los parámetros de qué forma o cómo se utiliza dichos artículos, evidenciándose una clara vulneración al derecho de defensa.

Teniendo en cuenta que el secreto como concepto trasladado a la investigación, se comporta como una herramienta de apoyo al reconocimiento de las condiciones fácticas y jurídicas que se encuentra en torno a cierta sospecha delictiva; resulta de mucha utilidad para la realización de las diligencias preliminares, puesto que se pretende sobre estas un efecto positivo vinculado con el éxito de la investigación. Esto último ha de entenderse como la realización correcta de los actos de investigación destinados a la evidencia de la verdad, a fin de establecer el camino correcto hacia la imputación o la absolución según sea el caso.

Lo señalado deja en claro que la aplicación del secreto en las diligencias urgentes debe tener la característica de protección de las acciones de investigación en virtud de las condiciones de cuidado que se habrá de tener sobre la data que se observa y acumula en el diligenciamiento. La cautela con la que se ha de manejar el acto preliminar de investigación tendrá un efecto positivo en el sentido garantista del futuro desarrollo del proceso penal en el que se incorpora la igualdad de tratamiento para las partes que intervienen en el proceso.

De acuerdo a la investigación desarrollada por la tesista Díaz (2020), se plantea el siguiente cuestionamiento ¿Qué efectos genera la identificación de actos de vulneración sobre la defensa técnica? En principio el control respecto del derecho de defensa desde el ámbito de protección material, no se manifiesta de manera satisfactoria, esto es que el reconocimiento de este derecho alcanza únicamente a la eficacia de la tutela jurisdiccional efectiva y del debido proceso. Es mediante estos principios que se viabiliza la ejecución del derecho a la defensa que en general le corresponde a cada una de las partes intervinientes en el proceso.

La atención principal le asiste al imputado, esto es que cobra preponderancia su protección debido a que está en juego la restricción de derechos; de acuerdo a ello resulta necesaria la intervención adecuada de quien ha de ejercer el derecho material de la defensa antes mencionada. Esto implica que el letrado que se ocupe de tal acción deba asumir el patrocinio con las capacidades necesarias y destrezas jurídicas a fin de brindar el correcto tratamiento técnico de la defensa.

Es precisamente este segundo ámbito de protección, que es la cuestión técnica que le corresponde asumir a quien patrocina la causa, el que debe ser controlado con mayor atención, vale decir que es de responsabilidad normativa el control de parte de los magistrados para asegurar la correcta contemplación de tal derecho. Es así que la intención de asegurar la defensa técnica idónea tendrá un reflejo sobre la eficacia de la investigación, en tanto que el fin de la prueba se consolida mediante actos correctamente realizados para dotar de seguridad jurídica al proceso penal, lo cual va de la mano con el garantismo que lo ha de caracterizar.

“La audiencia de apelación prescrita por el artículo 420.5 NCPP se desarrolla trasgrediendo principios y garantías procesales que se encuentran inmersas en el impulso de un Procesal Penal Contradictorio, Adversarial y Garantista, más aún vulnera principios elementales como la imparcialidad, contradicción, etc; lo cual evidencia que las prácticas inquisitoriales, no han sido abandonadas completamente”. (Pinto Arce, 2015, pág. 155)

¿cuál es el ámbito de protección que ofrece el derecho a la defensa respecto a su participación en los casos de organización criminal?

Teniendo en cuenta que la postura generalizada sobre la garantía de la defensa como derecho, se percibe la existencia de dos ámbitos de protección, estos aspectos se reconocen en función de la manera en que se accede a dicha tutela, siendo la primer forma el poder acceder a tal derecho mediante la protección ofrecida como defensa material en todas las fases en que discurre el proceso de investigación; ello teniendo en cuenta que tal materialización debe asumirse desde las diligencias urgentes en tanto se haya recibido la noticia criminal. Peculiaridad que en la realidad no se produce de manera exacta, ello en tanto que la consagración del derecho requerirá de la participación del imputado con la presencia de un letrado que oriente su actuación en el desarrollo de la investigación penal.

Se asume en función a ello una característica de indefensión del imputado, en tanto que las condiciones en las que se presenta ante una investigación especial serán distintas a la de un proceso ordinario, vale decir que el análisis de la realidad se da en función a reglas, siendo así la condición de exigencia se orienta en función de la estructura de esta investigación especial, en tanto que la reserva de los datos que se producen en la investigación se cautelan al punto que el presunto responsable no puede enterarse del contenido producido por la intervención del Ministerio Público, aun cuando su propia persona registra como imputado.

La circunstancia o nivel en el que se produce el conocimiento del contenido u objeto de la investigación por parte del imputado siempre será a nivel de la formalización de la investigación; momento en el que recién se empieza a ejercer el derecho a ser asistido por un letrado y que éste se ocupe de manera directa de la

revisión de los elementos de prueba que consolidan la teoría del caso de parte del Ministerio público. Como es evidente en dicho nivel, previo a la formalización, solo se producirá un acercamiento a la garantía de la defensa, pero no se alcanza un ámbito de protección adecuado.

La función del Ministerio Público ante procesos de este tipo suele ser de carácter persecutorio, que generalmente se inclina a la necesidad de tener que probar la existencia del delito, lo cual no se supone debería ser el fin, la única motivación del Fiscal para el ejercicio de sus actividades tendría que ser la búsqueda de la verdad, ello en tanto que al ser titulares de la acción penal, tendrán que asumir la posición determinante de que esta acción depende de los fines del proceso y de la pena misma que es el resultado del reconocimiento de responsabilidad penal en función a descubrir y demostrar fehacientemente que se ha producido la acción penal y la existencia de razones específicas que motivaron la realización de la acción delictiva, que en los casos de crimen organizado.

Martín Cuadros (2018) “Por lo tanto la defensa técnica deficiente genera nulidad del proceso penal teniendo en cuenta que configura una violación al derecho constitucional y convencional al derecho a la defensa. Así lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia quien ha hecho énfasis en la importancia de que la defensa sea idónea y despliegue sus argumentos de defensa oportunamente, soportado en la legislación existente.

¿Cuál es el ámbito de protección que ofrece el derecho a la defensa con relación a la defensa técnica aplicada en el proceso de investigación penal por crimen organizado?

Ha de tenerse en consideración que la protección que ofrece el derecho a la defensa surge de la normativa constitucional, en tanto que se debe a la garantía de la defensa que le asiste a toda persona, lo cual incorpora dos ámbitos de protección, tanto el ámbito formal de la defensa así como el ámbito de protección material; el tema que trata la investigadora citada, se orienta a la protección de este derecho pero en una circunstancia específica que se relaciona con la cuestión formal de la garantía, ello en tanto se refiere a la manera en que se ejerce la defensa a cargo de un letrado. Desde luego esta concepción solamente es teórica, dado que no existe ninguna indicación legislativa que describa esta circunstancia como derivada del derecho a la defensa, menos la cuestión de efectos, sobre todo la nulidad que sugiere la investigadora.

Esta consecuencia sugerida, solo podría adaptarse al esquema del proceso penal en tanto se tuviera una pauta normativa que describa los aspectos sobre los que habrán de evaluarse aquellas acciones o inacciones que realiza el abogado en el ejercicio de su profesión, desde luego esta observación deberá estar enfocada en el fin que es la protección de los derechos de su patrocinado. En tal sentido la virtud que se supone incorpora el ejercicio de esta labor dentro del marco de idoneidad, tendrá un efecto positivo o negativo sobre la defensa del imputado.

Existen indicaciones teóricas sobre la forma en que se debe ejercer la defensa sobre todo en lo que respecta al cumplimiento de las acciones que se supone propician beneficio al imputado, lo cual debe ser atendido de manera puntual a fin de no generar perjuicios, pero solo es una apreciación o percepción de la opinión de juristas, que no ha trascendido más que como una simple indicación en la jurisprudencia, puesto que incluso se indica la existencia de esta pauta de

observación en las funciones del abogado, pero al momento de conceptualizar solo se hace mención a la defensa material que se enfoca a un ámbito general condicionado a los requerimientos o derechos que al imputado le asisten de manera directa, como son la participación de un letrado, la asistencia, la representación en el proceso, pero no se habla del desempeño idóneo de la defensa técnica.

Atendiendo a las circunstancias en las que se presenta la realidad del imputado en el proceso de investigación penal, se requerirá de la participación activa de la defensa formal, por lo mismo que hace falta saber ¿Qué mecanismos puede adoptar un letrado al evidenciar una indefensión en casos de Crimen Organizado? Esto implica la ejecución de acciones legales que se adapten a la estructura del proceso penal de acuerdo a la fase en la que se encuentre la discusión sobre la responsabilidad del imputado.

Tales condiciones como se ha dicho, dependen de cada una de las fases del proceso penal, sobre todo en aquellas en las que se precisa de una asistencia obligatoria por ley, de parte de un abogado, sea por decisión particular o porque fuera impuesto por el Estado. Para casos especiales como el de investigación por Crimen Organizado, se presenta una particular característica relacionada con el secreto de la investigación, lo cual conlleva a la sola presunción respecto a la responsabilidad de los sujetos que se vinculan con tal agrupación.

Lo señalado se percibe como una afectación al derecho a la defensa, es precisamente en este tipo de circunstancia en las que se requiere de la idónea

participación de la defensa técnica de parte del letrado a fin de reconocer el nivel de restricción que opera en razón del secreto, puesto que deberá identificarse el límite existente en virtud de los derechos fundamentales que como garantías le asisten a su patrocinado.

Discusión sobre el secreto de la investigación en el proceso penal

Partiendo del hecho de que la investigación penal según su propia naturaleza ya tiene características que incorporan cierta reserva respecto a la situación de las partes intervinientes e incluso a la razón delictiva que las promueve, siempre tendrá como característica paralela el respeto de las condiciones garantistas que ofrece el sistema normativo constitucional a todos los intervinientes. La particular atención del secreto en la investigación requiere de un cuidado especial así conviene interrogar ¿Qué procedimientos puede adoptar la fiscalía para no vulnerar el secreto a la investigación?

Según las condiciones en las que se presenta la situación vinculada con el secreto de la investigación, en tanto medida específica sobre determinados actos o procedimientos, se requiere de la adopción de procedimientos debidamente motivados, siendo esta la clave esencial para asegurar que no se presente ninguna condición vulneratoria de derechos o garantías que les corresponderían a las partes que intervienen en la investigación penal.

La condición especial que se describe debe tener como base de la motivación el respaldo de intereses públicos, esto quiere decir que la justificación de este tipo de eventualidades dentro del proceso penal, solo debe ampararse en la necesidad pública de que la investigación alcance su verdadero objetivo que es el esclarecimiento de la verdad.

TOMA DE POSTURA

En nuestro ordenamiento penal, se evidencia una clara vulneración al derecho a la defensa, cuando se pretende aplicar el secreto de la investigación en casos de criminalidad organizada, es decir, existe una indebida aplicación de dicha normativa procesal; con ello, se pretende establecer que el secreto como concepto trasladado a la investigación, se comporta como una herramienta de apoyo al reconocer condiciones fácticas y jurídicas que se halla en torno a una sospecha delictiva; por lo que, resulta de mucha utilidad la realización de las diligencias preliminares, puesto que, se pretende sobre estas un efecto positivo vinculado con el éxito de la investigación.

Es decir, existirá un efecto positivo en el sentido garantista del futuro desarrollo del proceso penal en el que se incorpora la igualdad de tratamiento para las partes que intervienen en el proceso. Además, cuando se habla del control respecto al derecho de defensa desde el ámbito material, esta no se manifiesta de manera satisfactoria, esto es el reconocimiento de este derecho que alcanza únicamente a la eficacia de la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Por

otro lado, resulta necesaria la intervención adecuada de quien ha de ejercer el derecho material de la defensa antes mencionada, esto implica que el letrado que se ocupe de tal acción deba asumir el patrocinio con las capacidades necesarias y destrezas jurídicas a fin de brindar el correcto tratamiento técnico de la defensa; en este último punto la defensa técnica que le corresponde asumir a quien patrocina la causa, el que debe ser controlado con mayor atención, vale decir que es de responsabilidad normativa el control de parte de los magistrados para asegurar la correcta contemplación de tal derecho. Atendiendo a las circunstancias en las que se presenta la realidad del imputado en el proceso de investigación penal, se requerirá de la participación activa de la defensa formal, por lo mismo que hace falta saber ¿Qué mecanismos puede adoptar un letrado al evidenciar una indefensión en casos de Crimen Organizado? Esto implica la ejecución de acciones legales que se adapten a la estructura del proceso penal de acuerdo a la fase en la que se encuentre la discusión sobre la responsabilidad del imputado. Tales condiciones como se ha dicho dependen de cada una de las fases del proceso penal, sobre todo en aquellas en las que se precisa de una asistencia obligatoria por ley, de parte de un abogado, sea por decisión particular o porque fuera impuesto por el Estado. Para casos especiales como el de investigación por Crimen Organizado, se presenta una particular característica relacionada con el secreto de la investigación, lo cual conlleva a la sola presunción respecto a la responsabilidad de los sujetos que se vinculan con tal agrupación esto es en función a la teoría del delito y la imputación. Aunado a ello, se sabe que la función del Ministerio Público ante procesos de este tipo suele ser de carácter persecutorio, que generalmente se inclina a la necesidad de tener que probar la existencia del delito, lo cual no se supone

debería ser el fin, la única motivación del Fiscal puesto que es el titular de la acción penal, y que para el ejercicio de sus actividades deberá basarse en criterios orientados a la búsqueda de la verdad. Por lo que, se requiere que adopte procedimientos debidamente motivados, siendo esta la clave esencial para asegurar que no se presente ninguna condición que vulnere los derechos o garantías, esto es la materialización del garantismo penal que les corresponderían a las partes que intervienen en la investigación penal.

5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Estudiar doctrinariamente el derecho a la defensa de los imputados para verificar su efecto en los casos de crimen organizado”

El sentido conceptual que permite advertir la existencia del derecho a la defensa es la intención de un equilibrio en el tratamiento de las partes ante el escrutinio estatal sobre las conductas desplegadas en el decurso de la actividad social; es así que le corresponde a cada sujeto, la posibilidad de establecer un límite a la actividad punitiva del Estado para hacer valer su derecho, ello en tanto exista un índice de vulneración sobre las condiciones de garantía que ofrece constitucionalmente tal derecho.

Los vínculos sociales permiten establecer relaciones que tienden a la ruptura del ordenamiento jurídico, puesto que salen del esquema de lo permitido, la valoración de este tipo de acciones, tendrá un espacio dentro del sistema de justicia, pero se hace necesaria también la presencia de la contradicción como principio que opera de manera libre para que se consiga un adecuado nivel de defensa sobre los

intereses que corresponden a todas las partes que intervienen en dicha investigación con especial atención de quien ha de sufrir la persecución penal.

Sobre la condición de la defensa como garantía y como derecho se puede señalar que existe además otra contemplación destinada a ordenar el tipo de derecho que se pretende amparar; los elementos de protección que surgen al aplicar este concepto se orientan hacia una defensa material y otra de tipo formal; siendo la primera la que interesa revisar del ejercicio jurisdiccional a fin de establecer si se produce de manera adecuada la correcta protección jurídica.

Se entiende que la defensa material debe ser ejecutada de manera directa por el abogado que se ocupa del patrocinio del imputado, esto con la intención de señalar en el proceso los derechos que le asisten y de acuerdo a las pautas del proceso de investigación, alcanzar el esclarecimiento de los hechos con el fin de sacar a la luz la verdad mediante la prueba.

Es importante por ello para este caso en particular hacer el siguiente cuestionamiento si acaso ¿Es eficaz la defensa como mecanismo en los procesos de crimen organizado?, ante ello se puede señalar que existe contraposición del derecho a la defensa y el desarrollo de la defensa técnica eficaz, en tanto que no se logra apreciar un sentido de idoneidad en el desarrollo técnico de la defensa, dado que el patrocinio no resulta adecuado, pues deja cabos sueltos en el ejercicio de la defensa, sobre todo en razón de que para este tipo de casos no se cuenta con el acceso completo sobre la información que corresponde al imputado, dada la condición e secreta que se le aplica a la investigación.

Es importante señalar también que la condición protectora que sugiere la participación de la defensa como derecho tiene un posible origen en la garantía del

debido proceso, el cual implica una serie de condiciones para que la investigación se lleve a cabo dentro de los parámetros jurídicamente válidos. Para el caso de la lucha contra el crimen que construye estratégicamente el Estado se puede apreciar una justificación que es la garantía de seguridad ciudadana que impulsa la intervención de ius puniendi, con ello se determinará si ¿Realmente se respeta la garantía de la defensa personal en casos de crimen organizado?

-¿Qué efectos producirá la nulidad del proceso penal en casos de crimen organizado? Teniendo en cuenta la estructura del proceso penal, las condiciones en que se han planteado las nulidades, permite razonar sobre la aplicación del concepto de nulidad absoluta, la cual se establece de manera puntual en el artículo 150 inciso d- del ordenamiento adjetivo penal, es en este rubro que se contempla la protección de garantías constitucionales como móvil para establecer una condición limitante del proceso, esto es que, principalmente se protege la garantía del derecho a la defensa.

Es importante además de ello señalar que esta participación procesal tendrá en cuenta la regla específica respecto a la nulidad que describe los efectos de esta; es decir que como resultado de la aplicación nulificante, conlleva a dejar sin efecto la fase en la que se identifica la nulidad, o las condiciones que la provocan, que pueden de aspecto netamente legislativo o jurisdiccional, lo cual se contempla en el artículo 154 numeral 4 del Código procesal penal.

- ¿Qué mecanismos existen para un correcto control de la aptitud (nivel de eficacia de la defensa técnica) procesal del defensor? En la estructura del proceso penal, se

presentan condiciones de control para lo que respecta a la defensa como derecho que corresponde a las partes que intervienen en el proceso de investigación. Tal connotación interesa sobre todo en función a la garantía de la defensa, que como tal siendo parte de la estructura normativa constitucional, requiere para su correcta ejecución de un desarrollo legislativo específico.

Tal construcción reguladora debería contemplar el desarrollo del derecho de defensa en función a las pautas de efectividad en el cumplimiento de las otras garantías que le asisten a las partes, principalmente al imputado cuyos derechos se encuentran en riesgo. Las condiciones referidas tendrán que ser atendidas y limitadas a la vez, por lo mismo que las reglas de la defensa técnica se configuran como parte del derecho a la defensa, pero no se aprecia de manera adecuada su efecto sino hasta haber llegado a la fase final de la investigación, esto tendría un efecto negativo sobre la situación del imputado en tanto que no se ejecutara correctamente su defensa.

Esto implica que la intervención del Estado para controlar este tipo de efectos negativos, debe hacerse mediante reglas que más allá de establecer tal protección del derecho a la defensa, debiera asistir con la orientación debida a los magistrados que serán quienes se encargue de este tipo de control, para que los que participan en fases previas como la diligencia preliminar, tengan la prerrogativa o potestad para intervenir a fin de sugerir una correcta ejecución de la defensa. Esta particular intervención tendrá un efecto directo sobre las condiciones de secreto en la

investigación, que si bien se trata de un límite válido, deben respetarse las pautas de control relacionadas con las garantías procesales.

- ¿Qué mecanismos utilizan los colegios de abogados para garantizar la asistencia de un letrado para la defensa de derechos e intereses de una persona? Cabe indicar que esta participación de control, se trata de un nivel extrajudicial para lo que respecta a las funciones de los letrados que se ocupan incorrectamente de la defensa como producto de un inadecuado ejercicio de la profesión. Tal control es ejecutado en razón de los reclamos establecidos que únicamente controlan aspectos de carácter ético y formal en el ejercicio de la defensa.

Desde luego que tal intervención apoya el control Estatal, pero en lo que respecta al caso del secreto en la investigación, resulta insuficiente para establecer parámetros que guíen la intervención estatal, por lo mismo que se plantea la posibilidad de unificar acciones a fin de evitar la presencia abusos en la configuración de un sistema de justicia más eficiente, puesto que la condición ética que da respaldo a los colegios profesionales, termina influenciando en aspectos procesales.

TOMA DE POSTURA:

El Estado se encuentra en una constante construcción de estrategias para la lucha contra la criminalidad organizada, por lo que, se puede apreciar una justificación como lo es la garantía de seguridad ciudadana que impulsa la intervención del ius puniendi, con ello se ha de determinar si realmente se respeta la garantía de la defensa en este tipo de casos.

En consecuencia, mientras exista un indicio de violación a las condiciones que garantiza este derecho, existe la posibilidad de que cualquier cuestión limite la acción punitiva ejercida por el estado, más aún, si de la construcción de vínculos sociales rompen el sistema de justicia, por ende, deberá ser obligatoria la presencia de nuestro ordenamiento jurídico, con el fin de lograr un adecuado nivel de defensa sobre los intereses que corresponden a las partes involucradas en la investigación.

Dicha protección cuenta con elementos que surgen de aplicar este concepto orientándose a una defensa material y otra formal. Entendiéndose por defensa material, aquella persona instruida en el derecho que asiste directamente al acusado a lo largo de la investigación, con el fin de esclarecer los hechos y revelar la verdad con pruebas.

Para concluir si es efectiva o no la protección como mecanismo en procesos de crimen organizado, es importante afirmar, que existe un claro conflicto entre el derecho a la defensa y el desarrollo de dicha defensa técnica eficaz. Considerándose que, la defensa técnica deberá ser efectiva, empero, en casos de esta naturaleza no se logra apreciar un adecuado desarrollo técnico de defensa, debido a que, al ser casos con el deber de confidencialidad, no brinda al acusado el pleno acceso a dicha información relevante.

Además, se deberá tener en cuenta la estructura del proceso penal y las condiciones que dan a lugar las nulidades, regulada en el Artículo 150° inciso d del Código Procesal Penal, es decir, en este campo está motivado por las garantías constitucionales que definen los límites del proceso, garantizando el derecho a la defensa. Cabe señalar, que esta relación procesal tendrá en cuenta las reglas especiales de nulidad o sus efectos como resultado su aplicación, contemplado en el artículo 164° numeral 4 del mismo cuerpo normativo.

Tal es así, que para que exista un correcto control de las habilidades procesales del defensor, dicha defensa tendrá que determinarse en función a garantizar primordialmente el derecho a la defensa, y como tal requiere un desarrollo legislativo para su adecuada implementación. Para dicho desarrollo de tal regulación debe considerarse el desarrollo del derecho a la defensa sobre la base de una directriz sobre la eficacia respetando otras garantías que amparan a las partes, fundamentalmente al imputado.

Del mismo modo, la construcción reguladora debería contemplar el desarrollo del derecho de defensa en función a las pautas de efectividad en el cumplimiento de las otras garantías que le asisten a las partes, principalmente al imputado cuyos derechos se encuentran en riesgo. Las condiciones referidas tendrán que ser atendidas y limitadas a la vez, por lo mismo que las reglas de la defensa técnica se configuran como parte del derecho a la defensa, pero no se aprecia de manera adecuada su efecto sino hasta haber llegado a la fase final de la investigación, esto tendría un efecto negativo sobre la situación del imputado en tanto que no se

ejecutara correctamente su defensa, o que repercutirá negativamente en el estado del imputado en la medida en que su defensa no se lleve a cabo de forma adecuada.

Aunado a ellos, cuando el Estado interviene para controlar dichos impactos negativos, deberá realizarlo a través de normas que, además de establecer dicha protección del derecho a la defensa, deberá ayudar a orientar a los jueces que estarán a cargo del control, de manera que quienes intervienen en etapas previas, como lo es la investigación preliminar, tengan el privilegio o el derecho de intervenir para recomendar la correcta actuación de la defensa, respetando las pautas relacionadas con las garantías procesales.

Finalmente, al implementarse ciertos mecanismos en los colegios de abogado, con la finalidad de garantizar la asistencia de un letrado para la defensa de derechos e interés de una persona, es importante señalar que, esta implicancia controla las funciones de los abogados, quienes se ocupan de manera incorrecta de la defensa realizando un inadecuado ejercicio profesional. Este control se ejerce en virtud de requisitos establecidos que controlan únicamente aspectos de carácter moral y formal del ejercicio de la defensa.

5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar la realidad jurisdiccional en el Distrito Judicial de Lambayeque respecto a la aplicación del secreto de la investigación en los casos de crimen organizado para verificar la eficacia de la defensa de los imputados”

Según lo planteado como unidad de análisis en esta tesis, se procedió a observar el criterio adoptado jurisdiccionalmente por parte de los magistrados del sistema de justicia al momento de formalizar la investigación con intervención del secreto de la misma en base a la naturaleza compleja del crimen organizado. Cuyos resultados han permitido verificar un criterio común con acercamientos puntuales respecto a la presunción del crimen organizado y el establecimiento de un plazo que supera la condición normativa y afecta el derecho a la defensa del imputado.

Esta realidad es la que se aprecia al momento de aplicar el secreto de la investigación, puesto que como se aprecia en el análisis antes elaborado, se utiliza ante una circunstancia especial, que es trasladada al análisis de conductas sugerentes de la existencia de una organización criminal. Esta condición particular de las acciones delictivas sería el carácter de complejidad que está justificando la aplicación del secreto de la investigación. Esta situación se comprende como válida en tanto supere el nivel de jerarquía que ocupa el derecho a la defensa de las partes, principalmente del imputado, que debe ser materializado con el acceso a la información que describe el carácter de imputación que se le atribuye.

Esto se indica en tanto que la defensa material opera en circunstancias de conocimiento previo para que el aspecto técnico que se ocupe para desarrollar la

estrategia de defensa, sugiere el acceso a la información vinculada con la atribución de responsabilidad en razón de los indicios proporcionados por la noticia criminal y las diligencias previas y urgentes. Esta fase previa, lo que propicia, según lo analizado, es una presunción de la existencia de crimen organizado, que pese a la gravedad del ilícito y aún cuando se trata de protección de intereses sociales y comunes, no alcanza ello para construir un argumento sólido que permita restringir el acceso a la data informativa del proceso, limitando así el derecho a la defensa.

Además de esta apreciación sobre condiciones incompletas para razonar una necesaria atribución del secreto de la investigación, se verifica un exceso en la determinación del periodo en que se aplica tal condición, es decir que no solo se produce vulneración del derecho a la defensa, sino que también esta opera de manera excesiva en el tiempo. Tal vez se trata de una equiparación a los fines que supuestamente adquiere el proceso de investigación a través de la prisión preventiva, puesto que los plazos allí se gestionan en razón de la complejidad acompañada de la cantidad de sujetos que han de ser evaluados respecto a su conducta presuntamente ilícita y la necesidad de ejecutar actos de investigación extensos en el tiempo. Criterio que no se aprecia como adecuado o justificado, puesto que independientemente del secreto de la investigación, estos actos o diligencias de investigación pueden desarrollarse con total normalidad, solo con la aplicación de la reserva de la investigación.

El plazo excesivo supera el límite que establece la normativa procesal, ello en tanto que los veinte días sugeridos como máximo en su aplicación, conviene

únicamente para la atención de aspectos de control de legalidad respecto a las pruebas recabadas, por lo mismo que el legislador ha considerado dicho espacio mínimo. Esto tal vez obedece a una condición distintiva entre una y otra figura, es decir que el cuidado de la investigación debe operar principalmente para controlar la intervención mediática en el desarrollo del proceso, ello en tanto que es conocida la influencia pública que ejerce, lo que se conoce como presión mediática.

Esta limitación se puede lograr de manera suficiente con el carácter de reserva de la investigación, lo cual no tiene un plazo establecido puntualmente, lo que le provee de un carácter general en su intervención; siendo más bien un elemento necesario de puntualizar, el secreto de la investigación, de allí que su temporalidad no exceda un tiempo prudencial tal cual lo señala la norma adjetiva penal. Lo señalado conlleva a reconocer una posible interpretación inadecuada de la figura, más aún cuando su excesiva configuración en el tiempo provoca alteración del derecho a la defensa en el primer nivel y luego la vulneración de un carácter especial de este mismo derecho, relacionado con su ejecución técnica.

TOMA DE POSTURA.

Se tiene que, los titulares de la acción penal en la etapa de investigación preparatoria – inicio de diligencias preliminares y formalización – decretan el secreto de la misma en base a su complejidad, de los cuales se verifica que en muchas oportunidades establecen un plazo superando la condición normativa afectando el derecho de la defensa del imputado.

Al aplicarse esta condición normativa, considerándose la complejidad de dichos casos se encuentra justificado dicha aplicación, siempre y cuando se tome en consideración el derecho a la defensa, principalmente del imputado. Además, para el ejercicio de la defensa es necesario el acceso a la información relevante que establece la responsabilidad penal, derivada de las diligencias preliminares; con ello, se presume la existencia de una organización criminal, y que, si bien versa de la gravedad del delito con el fin de salvaguardar los intereses sociales, no resulta ser suficiente argumento para limitar el acceso a la información de la investigación y limitar el derecho a la defensa.

Se verifica, además, que no solo existiría una vulneración al derecho a la defensa, si no una actuación excesiva a la aplicación de un determinado plazo; tal vez, de manera errónea pretenden homologar los fines que adquiere una investigación por medio de la prisión preventiva, ya que allí, dicha medida excepcional los plazos se abordan por su complejidad, pluralidad de sujetos y los diversos actos de investigación que de por sí son extensos en el tiempo; por lo que, dicho criterio no se encuentra justificado, pues independientemente de que si se decreta el secreto de la investigación, tales actos o diligencias de investigación podrían llevarse a cabo con la sola aplicación de la reserva de la investigación.

Con ello, se evidencia que el plazo fijado excede el límite que establece la norma procesal, en la medida en que el máximo de veinte días propuesto en su aplicación sólo atañe a los aspectos de control de legalidad de las pruebas recogidas, por las mismas razones que los legisladores consideran mínimos.

Por lo que, esta limitación puede lograrse plenamente por el carácter de reserva de la investigación, que no tiene una duración determinada para su intervención; cabe señalar que el secreto de la investigación, a fin de que su término no exceda el plazo prudencial establecido por la norma procesa, conlleva a concluir que este número puede ser interpretado de manera insuficiente, especialmente si su excesiva asignación en el tiempo vulnera el derecho a la defensa.

5.1.4. Discusión sobre el objetivo: “Proponer la instauración de parámetros normativos adecuados a fin de garantizar la debida aplicación del secreto de la investigación y garantizar la defensa de los imputados”

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis teórico que aborda este tema del secreto de la investigación en los casos de crimen organizado, se advierte que ante la vulneración del derecho a la defensa generada por el plazo excesivo de esta condición restrictiva de los datos del proceso, es necesario proponer la incorporación de parámetros normativos que permitan controlar la actividad fiscal en virtud del secreto de la investigación, atendiendo únicamente a la necesidad de garantizar el desarrollo de la investigación.

Esta condición necesaria que garantice el desarrollo de la investigación en los casos complejos como el tema del crimen organizado, se traslada hacia un elemento inicial e indispensable en este tipo de casos, lo que se refiere a la toma de declaraciones de los imputados en este tipo de organización presunta, par lo cual no

se precisa mayor actuación o diligencia que ocupe plazos tan amplios como el que se observa en la realidad jurisdiccional analizada en esta tesis.

Se hace necesario un parámetro normativo que sea incorporado en el artículo que describe la condición de reserva y secreto de la investigación, para que con dicho planteamiento se oriente el criterio del juzgador, ello en tanto que procurará un control adecuado de la motivación de sus resoluciones al aceptar o no el plazo que postula el Fiscal. Para tal efecto sería necesaria la indicación puntual de un plazo especial para los delitos complejos como el de crimen organizado, a fin de que las diligencias destinadas a la toma de declaraciones operen con eficacia, siendo suficientes 30 días de plazo para tal fin.

El efecto de este parámetro normativo debe tener un efecto en los criterios que debe asumir el magistrado para adoptar una determinación sobre el plazo del secreto de la investigación, puesto que permitirá motivarla partiendo de un ámbito normativo de aplicación expresa de la regla, acompañado de otro ámbito interpretativo de dicha pauta normativa, para cerrar el criterio con su apreciación subjetiva que se conoce como las máximas de la experiencia.

Se requiere además un parámetro normativo de control respecto al requerimiento fiscal en función a la garantía de la defensa como derecho del imputado, puesto que el exceso en el plazo establecido para el secreto de la investigación altera la correcta ejecución de la defensa técnica ante el desconocimiento del criterio de imputación que se le atribuye. Dicho parámetro de

control se ha de generar con la intención de evitar el exceso de plazos sin justificación.

TOMA DE POSTURA

A juzgar por los resultados del análisis teórico del tema del secreto de la investigación en casos de criminalidad organizada, teniendo en cuenta la vulneración del derecho a la defensa que generan tales condiciones restrictivas, es necesario recomendar la inclusión de parámetros normativos que permitan un adecuado control con la finalidad de garantizar el desarrollo de la investigación.

Es así que, para garantizar tal desarrollo, como primer y esencial acto procesal es la toma de declaraciones de los investigados, los cuales no requieren de un tiempo extenso como se observa en la realidad jurisdiccional. Por ello, es necesario incluir un parámetro normativo con la finalidad de que se realice un adecuado control de la motivación de las resoluciones, el mismo que va como una orientación para el criterio de los juzgadores, y que además puede o no aceptar el plazo propuesto por el Fiscal. Para ello, es necesario establecer plazos específicos para estos delitos complejos, como lo es la criminalidad organizada, para que el procedimiento de tales diligencias funcione de manera efectiva, para lo cual es suficiente un plazo de 30 días.

El papel de este parámetro normativo ciertamente influirá en el estándar por el cual los jueces deben decidir sobre la duración del secreto de la investigación, ya que permitirá regular el límite normativo claramente aplicable, y que, de manera indispensable deberá acompañar su criterio subjetivo y/o interpretativo, conocido

como las máximas de la experiencia. También es necesario un parámetro de control normativo, ya que, la superación del período de secreto de la investigación puede alterar la correcta ejecución de la defensa, siendo que, existe un desconocimiento de la imputación que se le atribuye al investigado. Estos parámetros de control deben generarse para evitar plazos excesivamente largos sin justificación.

5.2. La validación de las variables

5.2.1. Validación de la variable independiente: La indebida aplicación del secreto de la investigación

En estricto cumplimiento del diseño de la investigación se percibe a esta variable independiente como el concepto estático referido al secreto de la investigación, el mismo que se consolida en el desarrollo de la investigación penal como un elemento que se está aplicando de manera inadecuada, sobre todo en la contemplación del plazo que se determina para ello, aún teniendo en cuenta que la regla indica de manera puntual un espacio temporal como límite para su ejecución.

Esta actividad jurisdiccional respecto al secreto de la investigación se ve justificada en la condición de complejidad de algunos casos como se aprecia aplicado en las investigaciones en las que se presume la existencia de crimen organizado, lo cual tendría que observarse desde la perspectiva de la justificación normativa, que de por sí ya pone un límite, y la justificación ponderativa, dado que su excesiva contemplación limita la acción del derecho de defensa que le corresponde a los imputados.

Esta vulneración del derecho a la defensa, se verifica cuando se pretende aplicar el secreto de la investigación en casos de criminalidad organizada, es decir, existe una indebida aplicación de dicha normativa procesal; con ello, se pretende establecer que el secreto como concepto trasladado a la investigación, se comporta como una herramienta de apoyo al reconocer condiciones fácticas y jurídicas que se halla en torno a una sospecha delictiva; por lo que, resulta de mucha utilidad la

realización de las diligencias preliminares, puesto que, se pretende sobre estas un efecto positivo vinculado con el éxito de la investigación.

La preocupación debe partir del control del garantismo penal que corresponde a todo proceso por los mismo que se incorpora la igualdad de tratamiento para las partes que intervienen en el proceso. Además, cuando se habla del control respecto al derecho de defensa desde el ámbito material, esta no se manifiesta de manera satisfactoria, esto es el reconocimiento de este derecho que alcanza únicamente a la eficacia de la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso.

Se entiende que la defensa debe ser ejercida bajo parámetros de equidad y además de vinculación con elementos de idoneidad la misma que corresponde a la defensa técnica elaborar, para lo cual se requiere ejercer el derecho material de la defensa antes mencionada, esto implica que el letrado que se ocupe de tal acción deba asumir el patrocinio con las capacidades necesarias y destrezas jurídicas a fin de brindar el correcto tratamiento técnico de la defensa; en este último punto la defensa técnica que le corresponde asumir a quien patrocina la causa, el que debe ser controlado con mayor atención, vale decir que es de responsabilidad normativa el control de parte de los magistrados para asegurar la correcta contemplación de tal derecho.

Sobre todo, la estabilización de condiciones en función al derecho a la defensa requiere de igualdad, siempre habrá de tenerse en cuenta la posición en la que se pone la realidad del imputado en el proceso de investigación penal, pues

requerirá de la participación activa de la defensa formal, por lo mismo que hace falta saber ¿Qué mecanismos puede adoptar un letrado al evidenciar una indefensión en casos de Crimen Organizado? Esto implica la ejecución de acciones legales que se adapten a la estructura del proceso penal de acuerdo a la fase en la que se encuentre la discusión sobre la responsabilidad del imputado. Tales condiciones como se ha dicho dependen de cada una de las fases del proceso penal, sobre todo en aquellas en las que se precisa de una asistencia obligatoria por ley, de parte de un abogado, sea por decisión particular o porque fuera impuesto por el Estado.

Sin duda alguna se requiere de una atención especial ante la complejidad de casos particulares o de especial atención debido al interés social que engloba, siendo así se presente la investigación por Crimen Organizado, bajo una particular característica relacionada con el secreto de la investigación, lo cual conlleva a la sola presunción respecto a la responsabilidad de los sujetos que se vinculan con tal agrupación esto es en función a la teoría del delito y la imputación. Aunado a ello, se sabe que la función del Ministerio Público ante procesos de este tipo suele ser de carácter persecutorio, que generalmente se inclina a la necesidad de tener que probar la existencia del delito, lo cual no se supone debería ser el fin, la única motivación del Fiscal puesto que es el titular de la acción penal, y que para el ejercicio de sus actividades deberá basarse en criterios orientados a la búsqueda de la verdad.

La mejor posición que se puede adoptar para el desarrollo de la actividad jurisdiccional es que se logre transparentar la decisión que se adopta, desde luego en vinculación con lo propuesto a nivel fiscal, es por ello preciso acondicionar procedimientos debidamente motivados, siendo esta la clave esencial para asegurar que no se presente ninguna condición que vulnere los derechos o garantías, esto es la materialización del garantismo penal que les corresponderían a las partes que intervienen en la investigación penal.

Para tales fines, el control debe ser normativo a fin de que se diligencie de manera adecuada la acción jurisdiccional puesto que los titulares de la acción penal en la etapa de investigación preparatoria – inicio de diligencias preliminares y formalización – decretan el secreto de la misma en base a su complejidad, de los cuales se verifica que en muchas oportunidades establecen un plazo superando la condición normativa afectando el derecho de la defensa del imputado.

Resulta de aplicación primordial dicho control normativo dadas las circunstancias de los casos complejos como el crimen organizado, desde luego considerando el derecho a la defensa, principalmente del imputado. Además, para el ejercicio de la defensa es necesario el acceso a la información relevante que establece la responsabilidad penal, derivada de las diligencias preliminares; con ello, se presume la existencia de una organización criminal, y que, si bien versa de la gravedad del delito con el fin de salvaguardar los intereses sociales, no resulta ser suficiente argumento para limitar el acceso a la información de la investigación y limitar el derecho a la defensa.

Lo más importante del equilibrio que se espera con un mayor control normativo, es que se limite la posibilidad de vulneración al derecho a la defensa, así como también la actuación excesiva a la aplicación de un determinado plazo; tal vez, de manera errónea pretenden homologar los fines que adquiere una investigación por medio de la prisión preventiva, ya que allí, dicha medida excepcional los plazos se abordan por su complejidad, pluralidad de sujetos y los diversos actos de investigación que de por sí son extensos en el tiempo; por lo que, dicho criterio no se encuentra justificado, pues independientemente de que si se decreta el secreto de la investigación, tales actos o diligencias de investigación podrían llevarse a cabo con la sola aplicación de la reserva de la investigación.

Lo señalado se aprecia con bastante frecuencia en el desarrollo de la actividad jurisdiccional observada como muestra, evidenciándose que el plazo fijado excede el límite que establece la norma procesal, en la medida en que el máximo de veinte días propuesto en su aplicación sólo atañe a los aspectos de control de legalidad de las pruebas recogidas, por las mismas razones que los legisladores consideran mínimos.

La mejor opción jurídica que se presenta para evitar esta limitación y que puede lograrse plenamente con la aplicación del carácter de reserva de la investigación, que no tiene una duración determinada para su intervención; cabe señalar que el secreto de la investigación, a fin de que su término no exceda el plazo prudencial establecido por la norma procesa, conlleva a concluir que este número puede ser

interpretado de manera insuficiente, especialmente si su excesiva asignación en el tiempo vulnera el derecho a la defensa.

Es en virtud de todo lo señalado que se logra validar la variable bajo la siguiente afirmación:

La indebida aplicación del secreto de la investigación debe controlarse normativamente en función al plazo de aplicación o su reemplazo por la figura de la reserva.

5.2.2. Validación de la variable dependiente: El derecho a la defensa de los imputados por crimen organizado

Debe señalarse que la función de esta variable es conceptualizar el efecto de la problemática que se evidencia sobre el derecho a la defensa alterado en los casos de crimen organizado, es así que se presenta como principal elemento de observación una constante construcción de estrategias para la lucha contra la criminalidad organizada, por lo que, se puede apreciar una justificación como lo es la garantía de seguridad ciudadana que impulsa la intervención del ius puniendi, con ello se ha de determinar si realmente se respeta la garantía de la defensa en este tipo de casos.

En consecuencia, mientras exista un indicio de violación a las condiciones que garantiza este derecho, existe la posibilidad de que cualquier cuestión limite la acción punitiva ejercida por el estado, más aún, si de la construcción de vínculos

sociales rompen el sistema de justicia, por ende, deberá ser obligatoria la presencia de nuestro ordenamiento jurídico, con el fin de lograr un adecuado nivel de defensa sobre los intereses que corresponden a las partes involucradas en la investigación.

Dicha protección cuenta con elementos que surgen de aplicar este concepto orientándose a una defensa material y otra formal. Entendiéndose por defensa material, aquella persona instruida en el derecho que asiste directamente al acusado a lo largo de la investigación, con el fin de esclarecer los hechos y revelar la verdad con pruebas.

Para concluir si es efectiva o no la protección como mecanismo en procesos de crimen organizado, es importante afirmar, que existe un claro conflicto entre el derecho a la defensa y el desarrollo de dicha defensa técnica eficaz. Considerándose que, la defensa técnica deberá ser efectiva, empero, en casos de esta naturaleza no se logra apreciar un adecuado desarrollo técnico de defensa, debido a que, al ser casos con el deber de confidencialidad, no brinda al acusado el pleno acceso a dicha información relevante.

Además, se deberá tener en cuenta la estructura del proceso penal y las condiciones que dan a lugar las nulidades, regulada en el Artículo 150° inciso d del Código Procesal Penal, es decir, en este campo está motivado por las garantías constitucionales que definen los límites del proceso, garantizando el derecho a la defensa. Cabe señalar, que esta relación procesal tendrá en cuenta las reglas

especiales de nulidad o sus efectos como resultado su aplicación, contemplado en el artículo 164° numeral 4 del mismo cuerpo normativo.

Tal es así, que para que exista un correcto control de las habilidades procesales del defensor, dicha defensa tendrá que determinarse en función a garantizar primordialmente el derecho a la defensa, y como tal requiere un desarrollo legislativo para su adecuada implementación. Para dicho desarrollo de tal regulación debe considerarse el desarrollo del derecho a la defensa sobre la base de una directriz sobre la eficacia respetando otras garantías que amparan a las partes, fundamentalmente al imputado.

Del mismo modo, la construcción reguladora debería contemplar el desarrollo del derecho de defensa en función a las pautas de efectividad en el cumplimiento de las otras garantías que le asisten a las partes, principalmente al imputado cuyos derechos se encuentran en riesgo. Las condiciones referidas tendrán que ser atendidas y limitadas a la vez, por lo mismo que las reglas de la defensa técnica se configuran como parte del derecho a la defensa, pero no se aprecia de manera adecuada su efecto sino hasta haber llegado a la fase final de la investigación, esto tendría un efecto negativo sobre la situación del imputado en tanto que no se ejecutara correctamente su defensa, o que repercutirá negativamente en el estado del imputado en la medida en que su defensa no se lleve a cabo de forma adecuada.

Aunado a ellos, cuando el Estado interviene para controlar dichos impactos negativos, deberá realizarlo a través de normas que, además de establecer dicha

protección del derecho a la defensa, deberá ayudar a orientar a los jueces que estarán a cargo del control, de manera que quienes intervienen en etapas previas, como lo es la investigación preliminar, tengan el privilegio o el derecho de intervenir para recomendar la correcta actuación de la defensa, respetando las pautas relacionadas con las garantías procesales.

Finalmente, al implementarse ciertos mecanismos en los colegios de abogado, con la finalidad de garantizar la asistencia de un letrado para la defensa de derechos e interés de una persona, es importante señalar que, esta implicancia controla las funciones de los abogados, quienes se ocupan de manera incorrecta de la defensa realizando un inadecuado ejercicio profesional. Este control se ejerce en virtud de requisitos establecidos que controlan únicamente aspectos de carácter moral y formal del ejercicio de la defensa.

A juzgar por los resultados del análisis teórico del tema del secreto de la investigación en casos de criminalidad organizada, teniendo en cuenta la vulneración del derecho a la defensa que generan tales condiciones restrictivas, es necesario recomendar la inclusión de parámetros normativos que permitan un adecuado control con la finalidad de garantizar el desarrollo de la investigación.

Es así que, para garantizar tal desarrollo, como primer y esencial acto procesal es la toma de declaraciones de los investigados, los cuales no requieren de un tiempo extenso como se observa en la realidad jurisdiccional. Por ello, es necesario incluir un parámetro normativo con la finalidad de que se realice un adecuado control de la motivación de las resoluciones, el mismo que va como una orientación para el

criterio de los juzgadores, y que además puede o no aceptar el plazo propuesto por el Fiscal. Para ello, es necesario establecer plazos específicos para estos delitos complejos, como lo es la criminalidad organizada, para que el procedimiento de tales diligencias funcione de manera efectiva, para lo cual es suficiente un plazo de 30 días.

El papel de este parámetro normativo ciertamente influirá en el estándar por el cual los jueces deben decidir sobre la duración del secreto de la investigación, ya que permitirá regular el límite normativo claramente aplicable, y que, de manera indispensable deberá acompañar su criterio subjetivo y/o interpretativo, conocido como las máximas de la experiencia. También es necesario un parámetro de control normativo, ya que, la superación del período de secreto de la investigación puede alterar la correcta ejecución de la defensa, siendo que, existe un desconocimiento de la imputación que se le atribuye al investigado. Estos parámetros de control deben generarse para evitar plazos excesivamente largos sin justificación.

De acuerdo a lo establecido en la discusión y la validación es posible afirmar que:

Se verifica alteración del derecho a la defensa de los imputados por crimen organizado

5.3. La contrastación de la hipótesis

De acuerdo a la observación que realiza esta tesis, se presenta como resultado de la misma una determinación basada en los alcances de la validación de cada una de las variables:

La indebida aplicación del secreto de la investigación debe controlarse normativamente en función al plazo de aplicación o su reemplazo por la figura de la reserva, con lo cual se anularán los límites excesivos que se verifican como alteración del derecho a la defensa de los imputados por crimen organizado, siendo importante el planteamiento de un control a fin de que se establezca la reserva como alternativa.

Conclusiones

Conclusión general

Se ha logrado determinar que la indebida aplicación del secreto de la investigación debe controlarse normativamente en función al plazo de aplicación o su reemplazo por la figura de la reserva, con lo cual se anularán los límites excesivos que se verifican como alteración del derecho a la defensa de los imputados por crimen organizado, siendo importante el planteamiento de un control a fin de que se establezca la reserva como alternativa.

Conclusiones específicas

Primera:

Se arriba a la conclusión de acuerdo a las bases teóricas que sustentan el secreto de la investigación aplicada en el proceso penal, que tales condiciones son particulares según cada una de las fases del proceso penal, sobre todo en aquellas en las que se precisa de una asistencia obligatoria por ley. Para casos especiales como el de investigación por Crimen Organizado, se presenta una particular característica relacionada con el secreto de la investigación, que se basa teóricamente en la sola presunción respecto a la responsabilidad de los sujetos esto es en función a la teoría del delito y la imputación; además, de la justificación del carácter persecutorio como función del Ministerio Público en tanto titular de la acción penal, así se tiene también a la teoría de la búsqueda de la verdad, para asegurar el garantismo penal.

Segunda:

Se concluye en base al estudio doctrinario del derecho a la defensa de los imputados para verificar su efecto en los casos de crimen organizado, que las estrategias para la lucha contra este tipo de organizaciones precisa de un adecuado desarrollo del derecho de defensa, protección en el ámbito material formal para alcanzar efectividad, naturaleza que no se logra apreciar, como efecto del deber de confidencialidad. Circunstancia que podría conllevar a la aplicación de nulidades del Artículo 150° inciso d del Código Procesal Penal, en virtud de vulneración del derecho a la defensa. Se requiere además orientación de los jueces que estarán a cargo del control en etapas previas, como lo es la investigación preliminar.

Tercera:

Se concluye en base a la observación jurisdiccional en el Distrito Judicial de Lambayeque respecto a la aplicación del secreto de la investigación en los casos de crimen organizado para verificar la eficacia de la defensa de los imputados, que el secreto se determina por complejidad con un plazo superior al regulado afectando el derecho de la defensa del imputado; en tanto que limita el acceso a la información relevante, lo cual no se justifica pues bastaría con la aplicación del criterio de reserva de la investigación.

Cuarta:

Se concluye que existe posibilidad para la instauración de parámetros normativos adecuados a fin de garantizar la debida aplicación del secreto de la investigación y garantizar la defensa de los imputados en casos de criminalidad organizada para

evitar la vulneración del derecho a la defensa. Se procurará declaración de los investigados; el control de la motivación de las resoluciones, pues el juez decide sobre el plazo propuesto por el Fiscal; plazo específico para delitos complejos hasta 30 días mediante el control normativo.

Recomendaciones

Primera:

Se recomienda al sistema de justicia observe de manera idónea la aplicación de la figura del secreto de la investigación, en tanto que debe normalizarse la motivación de las resoluciones, sobre todo en las que se postula el plazo del secreto de la investigación por parte del Fiscal, ello en tanto que lo señala la determinación de la investigación que permite verificar la necesidad de plantear parámetros normativos de control a fin de que se controle la acción jurisdiccional.

Segunda:

Se recomienda que el control normativo de este problema se oriente sobre la indebida aplicación del secreto de la investigación en función al plazo que lo determina para que se consolide un máximo de 30 días en casos complejos como es de crimen organizado o su reemplazo por la figura de la reserva.

Bibliografía

- Angulo Arana, P. (2006). *La investigación y el Delito en el Nuevo Código Procesal Penal*. Lima: Gaceta Jurídica.
- Cruz Barney, O. (2015). *Defensa a la defensa y abogacía en México* (Primera ed.). México: Universidad Nacional Autónoma de México. Obtenido de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3878/14.pdf>
- De La Cruz Ochoa, R. (2007). el proceso penal y la delincuencia organizada (un examen comparado). *IUS. Revista del instituto de Ciencias Jurídicas*(19), 117-134. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/2932/293222926006.pdf>
- Díaz Gonzales, P. V. (2020). *Criterios para la incorproación de prueba nueva en etapa de juicio oral ante la vulneración del derehco a la defensa técnica eficaz del imputado, a partir de los procesos conocidos en los juzgados penales de Lambayeque*. Lambayeque: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Obtenido de http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/UNPRG/8727/D%C3%A1z_Gonz%C3%A1les_Patty_Vanessa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Espinoza de los Monteros, R. Z. (2017). El crimen organizado: Especial consideración a iberoamérica. *Revista Electrónica Iberoamericana*, XI(1), 1-29. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6493925.pdf>
- Martín Cuadros, V. K. (2018). *Nulidad de los procesos judiciales por deficiente defensa técnica juridica. Análisis del caso: proceso penal de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 906 de 2004*. Colombia: Universidad Católica de

Colombia. Obtenido de
<https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/21508/1/Nulidad%20de%20los%20procesos%20judiciales%20por%20deficiente%20defensa%20jur%C3%ADdica.pdf>

Nakasaki Servigón, C. A. (2006). *La garantía de la defensa procesal: Defensa eficaz y nulidad del proceso penal por indefensión*. Obtenido de Repositorio de la Universidad de Lima:
https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/5480/Nakasaki_Cesar.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pérez Capcha, R. A. (2021). *Alcance del secreto de las diligencias preliminares en la investigación contra el crimen organizado y su relación con el derecho de defensa del imputado*. Huacho: Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Obtenido de
<http://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/UNJFSC/4461/RICARDO%20ADOLFO%20PEREZ%20CAPCHA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Pinto Arce, R. V. (2015). *Vulneración del derecho de defensa del imputado y del principio contradictorio en el Código Procesal Penal en el sistema acusatorio, garantista y adversarial*. Huaráz: Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Obtenido de
http://repositorio.unasam.edu.pe/bitstream/handle/UNASAM/2615/T033_40033473_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Rodríguez, M. A. (10 de Febrero de 2017). *El Blog de De Torquemada - Derecho Procesal Penal y otros temas de derecho general*. . Obtenido de <https://detorquemada.wordpress.com/2010/08/05/secretodelainvestigacion/>
- Sagüez, N. P. (1999). Libertad personal, seguridad individual y debido proceso en Argentina. *Ius et Praxis*, V(1), 211-232. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/197/19750108.pdf>
- Toro Garzon, L. O., & Bustamante Rúa, M. M. (2019). La investigación y la prueba de contexto como elementos de política criminal para la persecución del crimen organizado. *Revista Criminalidad*, VXII(1), 101-1015. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v62n1/1794-3108-crim-62-01-00101.pdf>
- Vásquez Arana, C. A. (2020). La lucha contra la criminalidad organizada y su amparo en la legislación penal nacional. *Revista de investigación de la Academia de la Magistratura*, II(2), 141-164. Obtenido de <https://revistas.amag.edu.pe/index.php/amag/article/view/25>

Anexos

1. Formulario de encuesta para ser aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo

Tesis: “La indebida aplicación del secreto de la investigación como acción limitante de la defensa de los imputados en crimen organizado”

- I. Variable independiente: “La indebida aplicación de reserva de la investigación”
 1. La reserva de la investigación como límite procesal al acceso sobre la investigación para evitar la intromisión de terceros ajenos al proceso, lo cual incorpora al secreto de la investigación.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina
 2. Los efectos limitantes que operan en función a la reserva de la investigación al restringir al propio imputado para el conocimiento del avance de la investigación se proyectan como una vulneración de su derecho a la defensa.
 3. En ciertos aspectos de la investigación preparatoria la información correspondiente al avance del reconocimiento de la responsabilidad, sería posible ceder el acceso a la información que corresponde de manera directa sobre los intereses que afectan al imputado.

II. Variable dependiente: El derecho a la defensa de los imputados por crimen organizado

4. El derecho a la defensa ofrece la garantía para que los imputados por una determinada acción delictiva, puedan hacer ejercicio de su derecho fundamental para demostrar su inocencia en función al principio que la presume.
5. La creación del derecho a la defensa requiere de la participación de elementos técnicos que permitan ejecutar dicha garantía, los cuales en el caso de investigación por crimen organizado se encuentran restringidos en su acceso respecto a la información del avance de los actos previos a la formalización.
6. El acceso a la información en las investigaciones por crimen organizado debe flexibilizarse en lo que corresponde a la data que compromete al imputado, dejándose intactas las limitaciones sobre elementos como la colaboración eficaz y la red criminal.

Link de la encuesta:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Aejndl-Mn2KVLKZJY27hYs6UM7SvgZddfahaCoMoBUXp4Q/viewform?usp=sf_link

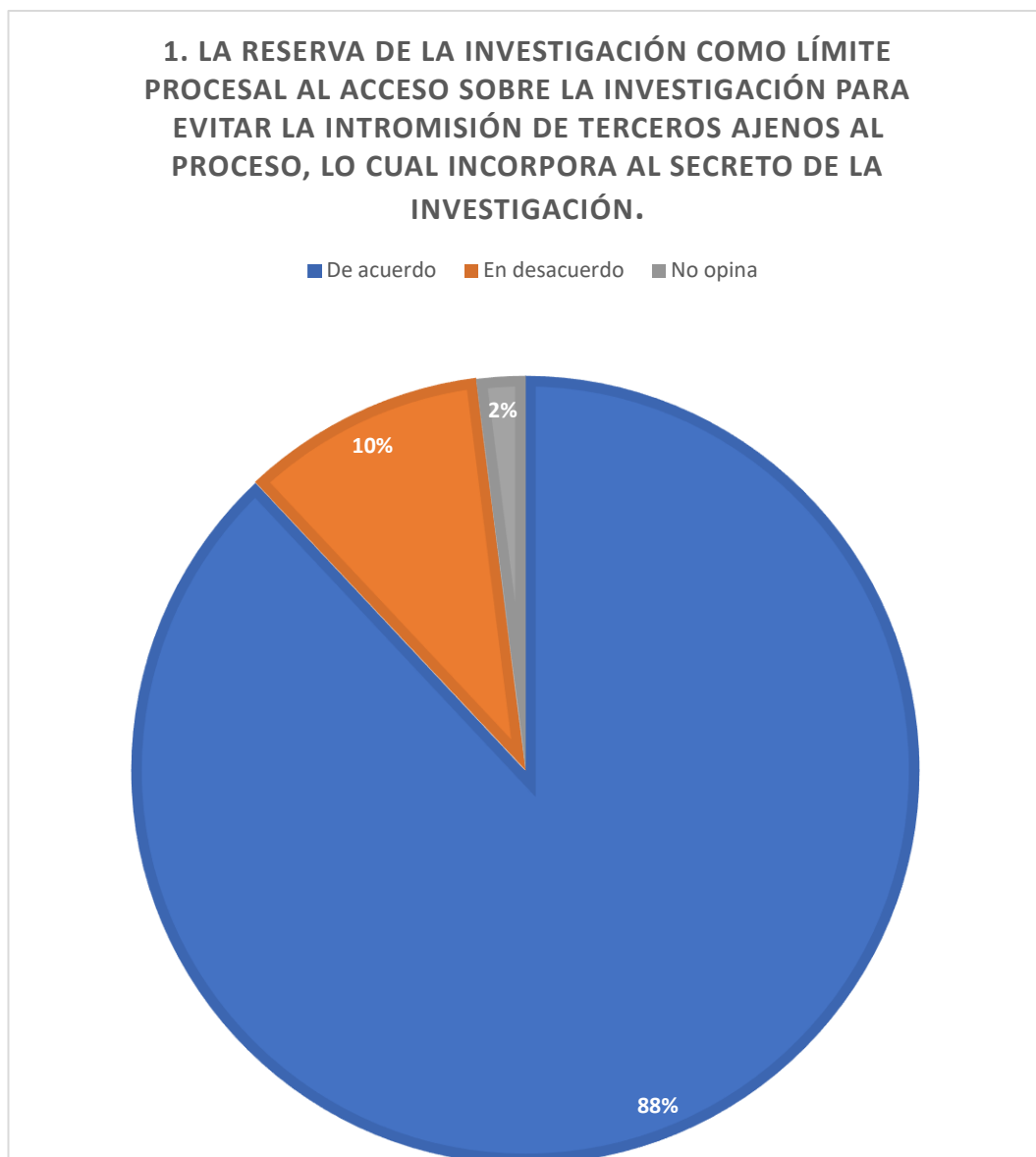
2. Resultados de la aplicación de la encuesta para la opinión de expertos

Tabla 1: “Tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 1”

1. La reserva de la investigación como límite procesal al acceso sobre la investigación para evitar la intromisión de terceros ajenos al proceso, lo cual incorpora al secreto de la investigación.

Alternativas	Resultados numéricos
a. De acuerdo	44
b. En desacuerdo	05
c. No opina	01
Total	50

Ilustración 1: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 1”



OBSERVACIÓN:

Tal cual se muestra en el resultado de la gráfica porcentual, existe un 88% de encuestados que opinan favorablemente sobre la definición que plantea el ámbito de protección que se reconoce sobre el secreto de la investigación, para lo cual se ha identificado a la Reserva de la investigación que se debe entender como el

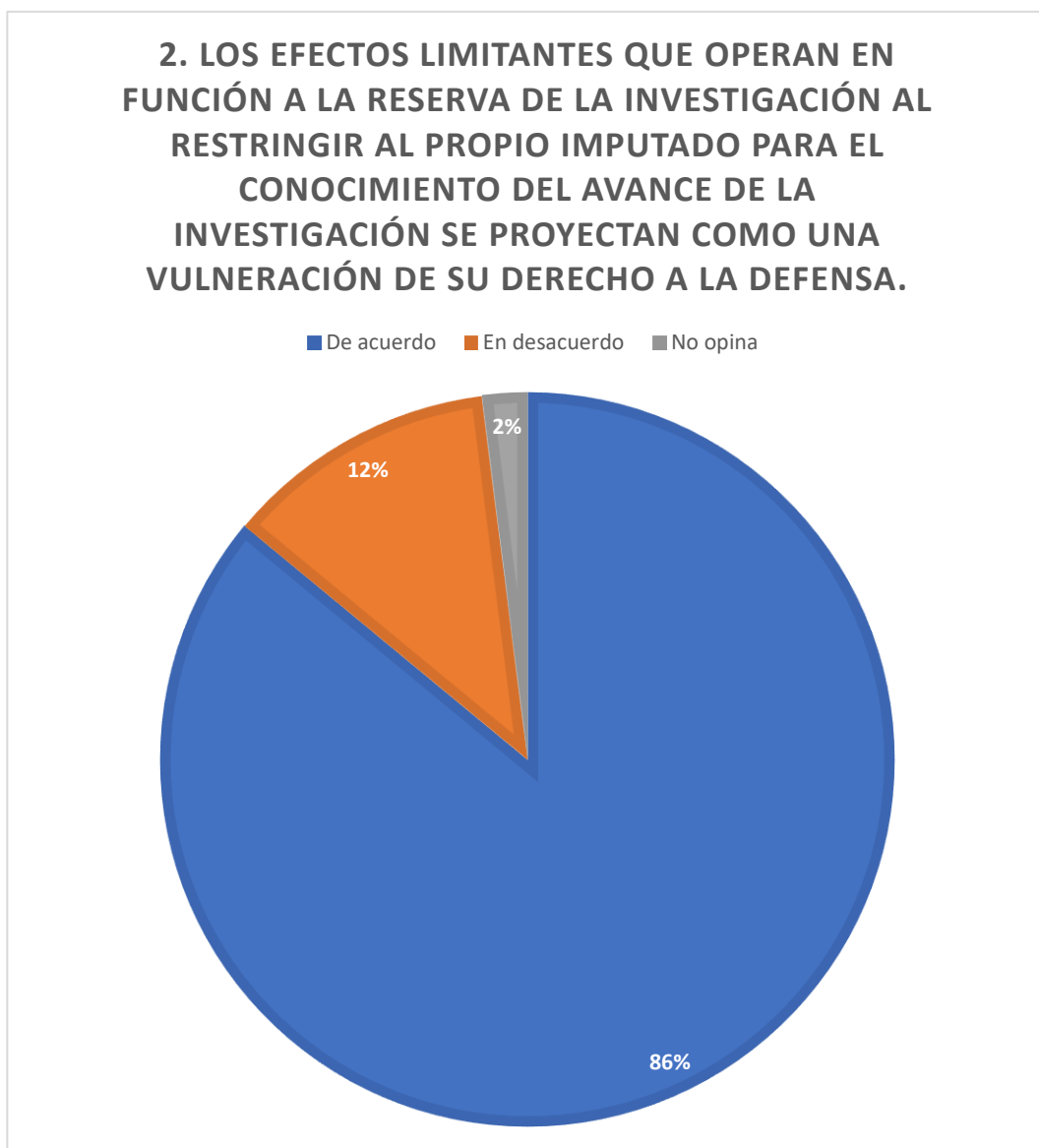
concepto global de las restricciones que pueden aplicarse en función a la data que construye el caso que se organiza en un expediente judicial o carpeta fiscal, dependiendo del nivel de la investigación.

Esta condición respecto a la dependencia, se proyecta en función de los límites que utiliza, ello refiere una distinción entre el aspecto general que representa la Reserva y el carácter especial que asume el secreto de la investigación; esto último tiene un aspecto más restrictivo en su ejecución, puesto que limita la intervención de quienes no forman parte de la investigación e incluso en función a la necesidad justificada, puede limitar el derecho de quien esta siendo investigado.

Tabla 2: “Tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 2”

2. Los efectos limitantes que operan en función a la reserva de la investigación al restringir al propio imputado para el conocimiento del avance de la investigación se proyectan como una vulneración de su derecho a la defensa.	
Alternativas	Resultados numéricos
a. De acuerdo	43
b. En desacuerdo	06
c. No opina	01
Total	50

Ilustración 2: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 2”



OBSERVACIÓN:

Es de notar el nivel de apreciación positiva que se recibe de parte de los operadores jurídicos encuestados, en tanto que alcanza hasta el 86% de todos aquellos que atendieron la encuesta. Este nivel de aceptación se orienta hacia la crítica que establece tal afirmación.

Se presenta esta crítica en virtud de la identificación de un criterio interpretativo confuso respecto al concepto de lo genérico y lo específico; conviene por ello que la percepción teórica referida a tal distinción entre la reserva y el secreto en la investigación, sea trasladada hacia el criterio jurisdiccional. Tal acción corresponde a una sentido interpretativo que busca el adecuado control de los principios que asisten al proceso penal.

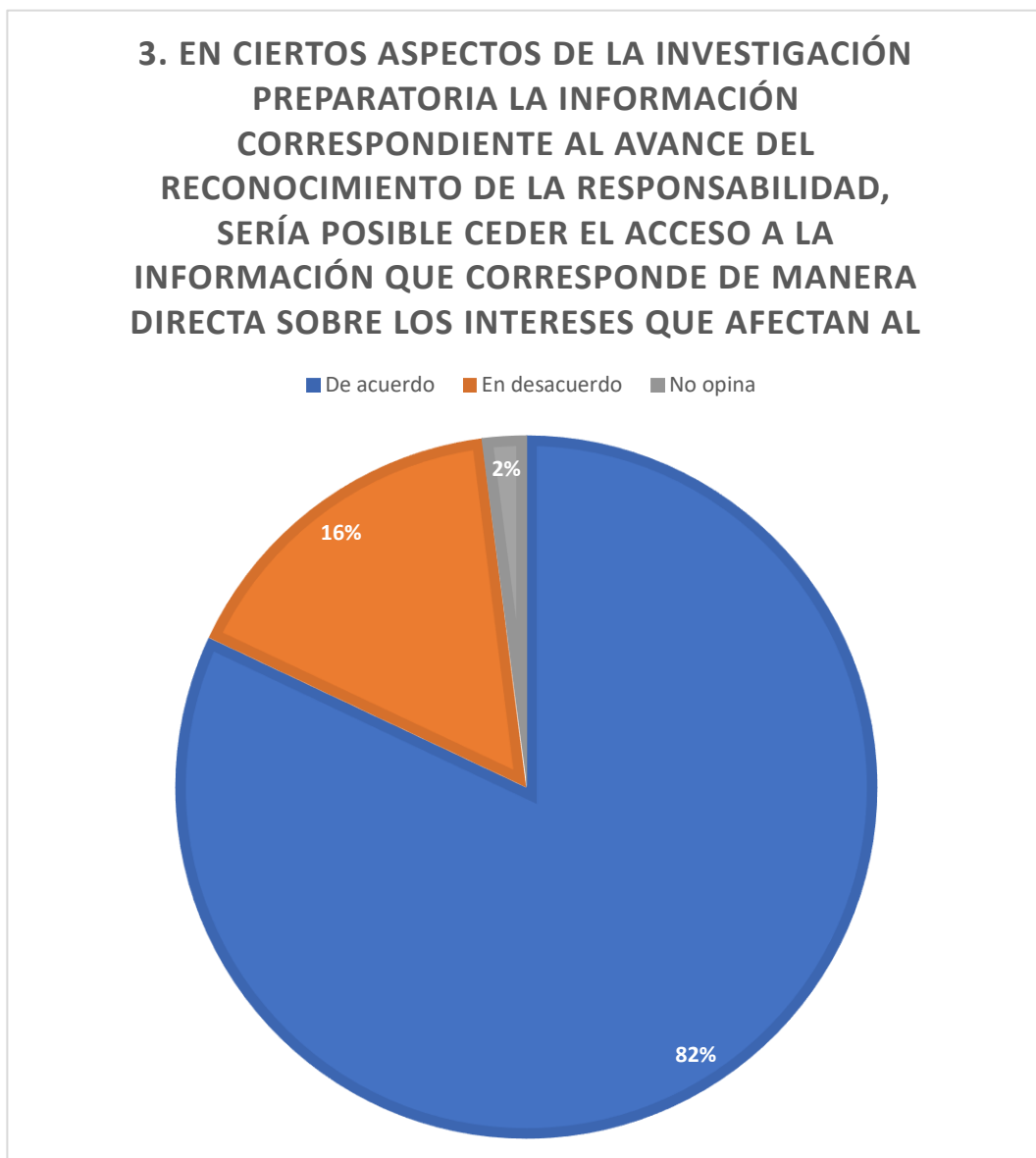
Esta garantía se basa en el interés de las partes, con especial atención del imputado; en tal sentido se hace de necesidad el adecuado tratamiento de la reserva de la investigación, bajo el simple direccionar del concepto hacia un plano de distinción, sumado a la exigencia de actos decisivos con la adecuada motivación que permita justificar la restricción del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

Tabla 3: “Tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 3”

3. En ciertos aspectos de la investigación preparatoria, la información correspondiente al avance del reconocimiento de la responsabilidad, sería posible ceder el acceso a la información que corresponde de manera directa sobre los intereses que afectan al imputado.

Alternativas	Resultados numéricos
a. De acuerdo	41
b. En desacuerdo	08
c. No opina	01
Total	50

Ilustración 3: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 3”



OBSERVACIÓN:

Los expertos en derecho procesal penal se han inclinado en un 82% para opinar favorablemente sobre la sugerencia de solución que se plantea respecto a la variable independiente. Esto implica que resultaría viable la sug

Tabla 4: “Tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 4”

4. El derecho a la defensa ofrece la garantía para que los imputados por una determinada acción delictiva, puedan hacer ejercicio de su derecho fundamental para demostrar su inocencia en función al principio que la presume.	
Alternativas	Resultados numéricos
a. De acuerdo	47
b. En desacuerdo	03
c. No opina	00
Total	50

Ilustración 4: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 4”

4. EL DERECHO A LA DEFENSA OFRECE LA GARANTÍA PARA QUE LOS IMPUTADOS POR UNA DETERMINADA ACCIÓN DELICTIVA, PUEDAN HACER EJERCICIO DE SU DERECHO FUNDAMENTAL PARA DEMOSTRAR SU INOCENCIA EN FUNCIÓN AL PRINCIPIO QUE LA PRESUME.

■ De acuerdo ■ En desacuerdo

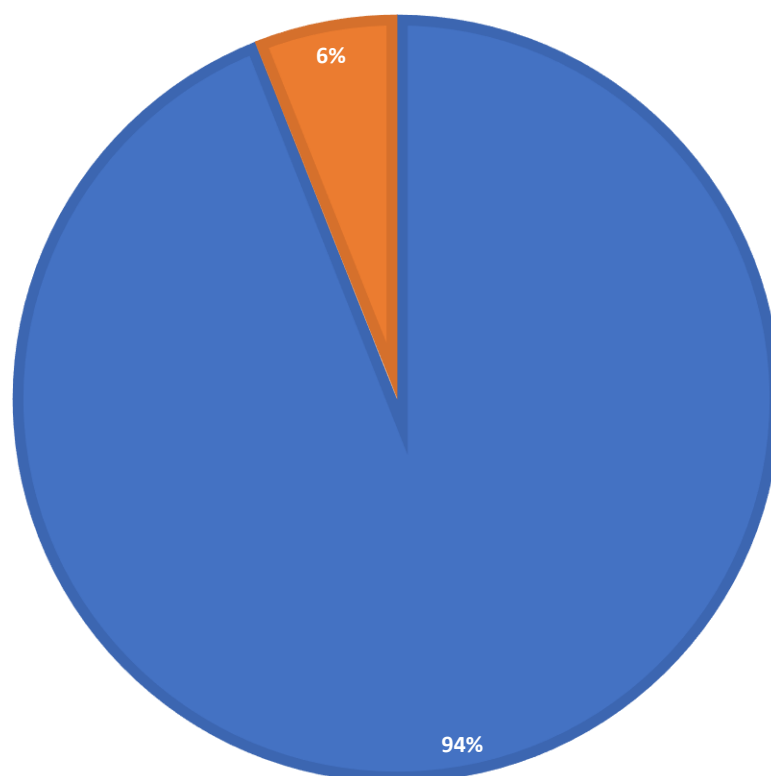


Tabla 5: “Tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 5”

5. La creación del derecho a la defensa requiere de la participación de elementos técnicos que permitan ejecutar dicha garantía, los cuales en el caso de investigación por crimen organizado se encuentran restringidos en su acceso respecto a la información del avance de los actos previos a la formalización.

Alternativas	Resultados numéricos
a. De acuerdo	44
b. En desacuerdo	06
c. No opina	00
Total	50

Ilustración 5: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 5”

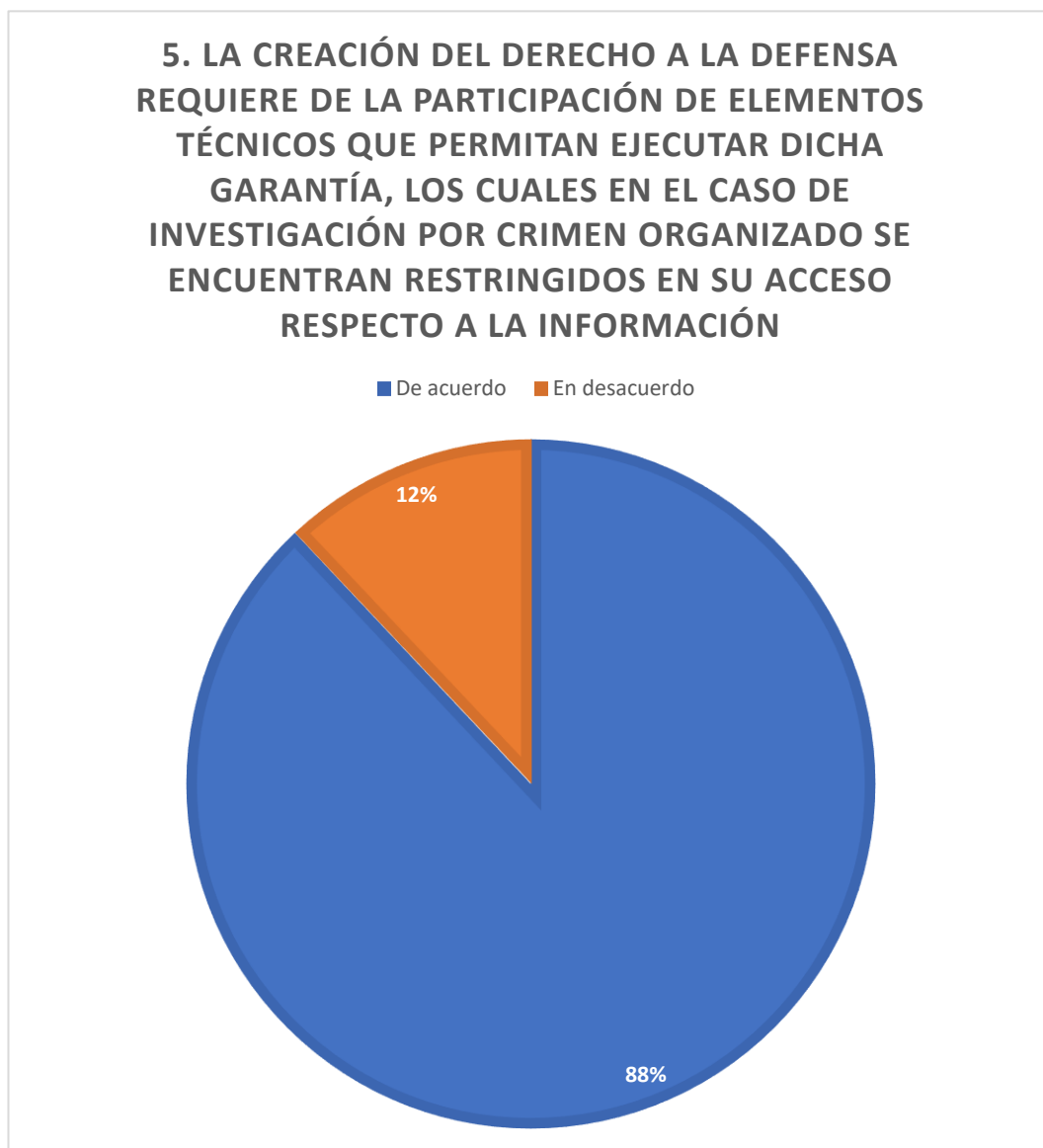


Tabla 6: “Tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 6”

6. El acceso a la información en las investigaciones por crimen organizado debe flexibilizarse en lo que corresponde a la data que compromete al imputado, dejándose intactas las limitaciones sobre elementos como la colaboración eficaz y la red criminal.

Alternativas	Resultados numéricos
a. De acuerdo	47
b. En desacuerdo	02
c. No opina	01
Total	50

Ilustración 6: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 6”

6. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LAS INVESTIGACIONES POR CRIMEN ORGANIZADO DEBE FLEXIBILIZARSE EN LO QUE CORRESPONDE A LA DATA QUE COMPROMETE AL IMPUTADO, DEJÁNDOSE INTACTAS LAS LIMITACIONES SOBRE ELEMENTOS COMO LA COLABORACIÓN EFICAZ Y LA RED CRIMINAL.

■ De acuerdo ■ En desacuerdo ■ No opina

